**¿DISCREPANCIA O CONCORDANCIA? LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN
EL DERECHO COLOMBIANO DE CARA AL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS**

LAURA PATRICIA MELO CRISTANCHO

TESIS DE MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE ORGANISMOS, CORTES Y
TRIBUNALES INTERNACIONALES

DIRECTOR: HELBER NOGUERA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
BOGOTÁ D.C.

2016

RESUMEN:

Al interior de la reparación integral a las víctimas por violación a los Derechos Humanos en Colombia, se observa la existencia de una dicotomía en el reconocimiento de las medidas de satisfacción, por una parte, la emanada de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como de la Ley de Justicia y Paz, y por otra la determinada por el Consejo de Estado. Así lo anteriormente expresado da cuenta que, al interior del Ordenamiento Jurídico no existe uniformidad en la implementación de dichas medidas, y ello reviste importancia por cuanto tal actividad debe encontrarse acorde con los estándares del Sistema Interamericano de D.D.H.H., específicamente con las sentencias de la Corte Interamericana. Bajo esta idea se busca establecer cuáles son los parámetros que con ocasión del desarrollo de la Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 se deben tener en cuenta a la hora de reconocer la aplicación de las medidas de satisfacción, siendo tal objetivo desarrollado a través de la creación o mejoramiento de los mecanismos jurídicos que propendan por la ejecución completa de dichas medidas.

PALABRAS CLAVE:

Derecho a la Reparación, Medidas de Reparación, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley de Justicia y Paz, Medidas Simbólicas, Medidas de Satisfacción, Víctimas.

OBJETIVO GENERAL: Analizar la implementación en Colombia de los criterios a la reparación del Derecho Internacional de los DD.HH. en materia de medidas de satisfacción entre 2005 y 2016.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Realizar un análisis histórico del desarrollo que han tenido las medidas de satisfacción en el Sistema Interamericano de DD.HH. a través del cual se observe el estado actual en el que se encuentran.
2. Examinar las providencias del Consejo de Estado que condenen al Estado como responsable por violación a los Derechos Humanos, estableciendo la naturaleza de las medidas de satisfacción ordenadas al interior de dichas providencias.

3. Analizar la ejecución las medidas de satisfacción decretadas en las providencias de las Salas de Justicia y Paz, y establecer que parámetros deben seguir de conformidad con lo contemplado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
4. Proponer de conformidad con los anteriores objetivos, una reforma al derecho nacional en materia de reparaciones que direccionen su accionar a la ejecución completa de las medidas de satisfacción con miras al cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos.

HIPOTESIS: según el integrante de determinar cuáles son los parámetros que con ocasión del desarrollo de las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 se deben tener en cuenta a la hora de reconocer la aplicación de las medidas de satisfacción, se considera como hipótesis necesario implementar la reparación de manera efectiva, a través de la aplicación de las medidas de satisfacción al interior de la reparación integral a las víctimas en Colombia, especialmente en lo relacionado con la Ley 1148 de 2011 al igual que, en el marco de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de DD.HH. en materia de dichas medidas, así como lo expresado por la doctrina especializada a nivel nacional e internacional.

METODOLOGÍA: La manera en que se desarrolló la presente investigación fue la recopilación documental de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Consejo de Estado y de las Salas de Justicia y Paz (Bogotá, Medellín y Barranquilla), así como de las leyes y decretos que en el ordenamiento jurídico colombiano han venido reconociendo las diversas formas de reparación, especialmente las llamadas medidas simbólicas, dentro de las cuales se encuentran las medidas de satisfacción. Igualmente, se acudió a la doctrina nacional e internacional especializada en la responsabilidad internacional y administrativa del Estado con ocasión de la violación a los Derechos Humanos. Dicho acervo documental fue posteriormente analizado desde una perspectiva comparativa, descriptiva e histórica que permitió extraer sus convergencias, diferencias, contextos y finalidades, así como los campos en que se ha dado su aplicación, las críticas y cambios que han tenido a lo largo de su vigencia en el derecho de protección de los Derechos Humanos

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. **CAPÍTULO 1:** LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
3. **CAPÍTULO 2:** LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO.
4. **CAPÍTULO 3:** MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA: LOS CASOS DE SALAS DE JUSTICIA Y PAZ Y DEL CONSEJO DE ESTADO.
5. CONCLUSIONES.
6. BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen al interior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos diversas modalidades de reparación para las víctimas que han sufrido la violación a sus derechos y garantías fundamentales consagradas en los instrumentos globales y regionales de protección de DD.HH.¹, siendo el Sistema Interamericano uno de los que más cuenta con una gama de tratados internacionales a saber: la Declaración Americana de los Derechos del hombre, la pretérita Convención de San José de 1969, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el "Protocolo de San Salvador": Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la "Convención de Belém do Pará": Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia entre otros².

Por su parte, el Estado colombiano en su derecho interno a través de su legislación y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de las Salas de Justicia y Paz, ha venido desarrollando mecanismos de protección y medidas de reparación teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos que ha realizado la Corte Interamericana de DD.HH. en sus providencias a partir de su entrada en vigencia en 1979, y hasta la actualidad.

¹ Thompson (2002) afirma como desde una mirada de los sistemas legales y las teorías morales existen tres formas de justicia de la reparación, la primera llamada *justicia positiva* que consiste en los derechos y deberes que pertenecen a individuos y grupos por virtud de un contrato, tratado o cualquier acto histórico. La segunda, la *justicia redistributiva* que tiene que ver con el castigo de los perpetradores de violaciones a los requerimientos de la justicia positiva. Finalmente se encuentra la llamada y poco atendida *justicia reparativa* que tiene relación con la restitución o recompensa por las violaciones a los derechos y garantías de las personas.

² Ver http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp

Conforme a lo anterior se encuentra que el mandato estatuido en el art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos³ -en concordancia con los arts.10 y 63.1 del mismo tratado-, -es el fundamento principal para el establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado por violación a los DD.HH., el epígrafe para el reconocimiento de las diversas medidas de reparación a las víctimas, y se constituye es un precepto a tener en cuenta por los Estados para adoptar en su derecho interno, medidas que busquen materializar los deberes de respeto y garantía de las libertades y derechos reconocidos en la Carta Interamericana de 1969, así como en los demás instrumentos del Sistema Regional que le complementan y desarrollan. Al respecto el juez Diego García Sayan como presidente de la Corte Interamericana afirmó:

“El proceso de creación jurisprudencial de la Corte a través del cual se ventilan casos contenciosos y medidas provisionales, ha tenido y tiene un creciente impacto en algunas redefiniciones normativas e institucionales al interior de los Estados. Que se han traducido en mejoras concretas en la garantía para los derechos humanos” (XLI Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos).

Expuesto lo anterior, se tiene que la presente investigación parte de la pregunta ¿conforme al sistema interamericano de DD.HH. cuáles son los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de aplicar las medidas de reparación integral a las víctimas de violación a los Derechos Humanos en Colombia, especialmente las llamadas *medidas de satisfacción*?, para lo cual se ha establecido como hipótesis implementar la reparación de manera efectiva, a través de la aplicación de las medidas de satisfacción al interior de la reparación integral a las víctimas en Colombia, especialmente en lo relacionado con la Ley 1148 de 2011 al igual que, en el marco de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de DD.HH. en materia de dichas medidas, así como lo expresado por la doctrina especializada a nivel nacional e internacional.

³ Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Como objetivo se encuentra imperioso analizar la implementación interna de los criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. en materia de medidas de satisfacción, a través de una recopilación documental, histórica y sistemática de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte constitucional, así como de otras instituciones del Estado colombiano, y en consecuencia establecer si el ordenamiento jurídico interno es conforme al Sistema Interamericano.

Finalmente, la investigación aquí presentada permite ser un aporte a la manera en que las víctimas del conflicto armado en Colombia pueden ser reparadas de manera íntegra no solo de conformidad con la jurisprudencia internacional, sino con la violación que han tenido que padecer, así esta indagación pretende ser una herramienta dignificante para todas las personas que siendo víctimas o sin serlo puedan ilustrarse acerca de las posibilidades que existen de lograr tal reparación. En relación con el ordenamiento interno se observa la necesidad de ampliar los mecanismos de participación de las víctimas en las formas de reparación, y un mayor compromiso por parte de la sociedad colombiana como actor activo de dicho proceso a través del reconocimiento de no olvidar lo sucedido. Finalmente se pregona materializar la importancia de esta investigación en la comunidad académica y en la sociedad en general, a través de un trabajo de maestría que por su temática pueda considerarse pionero y a partir de ello, futuros investigadores particulares y adscritos a Entidades públicas puedan seguir trabajando en él.

Con el fin de llevar a buen término la investigación se revisa en el **primer capítulo** las medidas de reparación en el derecho internacional y en el sistema interamericano de derechos humanos, haciendo referencia a los conceptos generales del derecho internacional de los derechos humanos, a su vez que el régimen de infracción y violación de derechos humanos, al igual que los mecanismos de reparación a la luz del SIDH, en el **segundo capítulo** se presenta el régimen normativo que tienen las medidas de reparación en el derecho colombiano, especialmente desde la óptica legal y jurisprudencial. Por último, en el **tercer capítulo** se presenta el análisis que se hace de las medidas de reparación a la luz de la jurisprudencia en los casos de Justicia y Paz y del Consejo de Estado colombiano, para finalmente presentar las conclusiones y dentro de ellas la propuesta para la aplicación

verídica de las medidas de satisfacción al interior de las reparaciones otorgadas por el derecho colombiano.

CAPÍTULO 1

MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

¿Qué es el régimen internacional de protección de derechos humanos?

La definición conceptual de los derechos humanos no ha sido pacífica al interior de los instrumentos de protección, la jurisprudencia y la doctrina especializada; sin embargo, pueden encontrarse diversas acepciones que a continuación se presentan. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (2002) establece que el Derecho internacional de los Derechos Humanos, es “un conjunto de principios y normas según los cuales los particulares o los grupos de personas pueden esperar cierto tipo de comportamiento o ayuda de las autoridades por el mero hecho de ser seres humanos”.

Por su parte Córdoba (2015) citando a la Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías establece que “los derechos humanos son aquellos derechos y libertades esenciales para configurar el estatuto jurídico de la persona en la comunidad en la que vive -requisito previo para una existencia humana digna en la sociedad moderna-”.

Blanc (2001) afirma que es de la esencia de los Derechos Humanos ser universales por lo cual tal característica, “comporta aceptar su propia existencia, pues ambas cuestiones – universalidad y existencia– caminan indisolublemente unidas, en la medida en que en ningún caso podría admitirse que los derechos humanos lo fueran tan solo respecto de cierta categorías o grupos humanos”. Igualmente se pronuncian Steiner & Uribe (2014) al decir:

El principio de universalidad es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, los tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Fundamento de lo anteriormente expuesto se puede encontrar en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945) al preceptuar en su art. 1 como propósito del organismo promocionar y alentar el respeto por los derechos humanos, consonante con el art. 55 de la misma Carta que en el literal C indica: “la Organización promoverá: [...] el

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.”

Ahora bien, otro sector de la doctrina opina que, se presenta una grave violación al ordenamiento internacional de los derechos humanos cuando la totalidad de los intereses más importantes para la humanidad (factor objetivo) y de los que pueden llegar a ser sus titulares (factor subjetivo), son quebrantados por cualquier sujeto de derecho público o privado afectando el núcleo de la existencia humana o del desarrollo de su dignidad (De Castro 1996).

Conforme a lo predicho se puede decir entonces que de conformidad con las acepciones presentadas, existen al interior de la dogmática jurídica internacional, diversas definiciones sobre la naturaleza del régimen de protección de los derechos humanos, no obstante observarse la existencia de algunos elementos en común, cuáles son, en primer lugar, la protección universal que tienen en cualquier Estado de la comunidad internacional, en segundo lugar, la protección que prima facie se le da a la persona humana, y en tercer lugar, el mandato de protección que tienen tanto el Estado como la sociedad misma respecto de sus integrantes.

Responsabilidad internacional del Estado

El derecho internacional público clásico⁴ admitía por principio que, frente a la violación de una obligación internacional por parte de un Estado, surgía el deber de éste de reparar el daño a través de un acto que fuera proporcional al perjuicio causado, en tal sentido el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (1927) se pronunció en el afamado *Caso de La fábrica de Chorzow* y afirmó:

“Es un principio de derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso implica una obligación de reparar en forma adecuada. La reparación, por lo tanto, es el complemento indispensable de una falta de aplicación de una convención y no hay necesidad para que esto se indica en el propio convenio. Las diferencias relativas a la

⁴ Desde una perspectiva histórica consúltase Crawford (2009), pp.1 y 2.

reparación, que puede ser debido a causa de la no aplicación de una convención, son en consecuencia las diferencias relativas a su aplicación.

[...]

Es, además, un principio generalmente aceptado en la jurisprudencia de arbitraje internacional, así como por los tribunales municipales, que una Parte no puede acogerse al hecho de que la otra no tiene recursos sobre alguna obligación o no ha recurrido a algunos medios de reparación, si la primera Parte tiene, por algún acto ilícito, la imposibilidad de este último de cumplir con la obligación de que se trate, o de recurrir al tribunal que habría sido abierta para él.” (Fondo, serie A, No. 17: pp. 21 y 31).

En el periodo comprendido entre 1919 y 1945, se comienzan a dar avances en la construcción del régimen único de responsabilidad internacional de los Estados a través del establecimiento de normas que diferenciaren las sanciones a cada obligación internacional violada, y no como se estaba llevando a cabo, en donde todo hecho internacionalmente ilícito, era sancionado con similar reparación. Así, el Pacto de la Sociedad de Naciones (Tratado de Versalles-1919), en sus arts. 10, 13, 16 y 17, estableció la responsabilidad estatal por violación del régimen del límite al uso de la fuerza (Córdoba, 2015).

Del mismo modo se pueden observar como antecedentes el proyecto de “Tratado de Asistencia Mutua” elaborado en 1923 por la Sociedad de Naciones, y el “Protocolo para la solución pacífica de las controversias internacionales” de 1924 que establecían el recurso de la guerra como uno de los actos ilícitos internacionales más graves. En último lugar, el Tratado internacional de renuncia a la guerra como mecanismo de solución de las controversias o “Tratado Briand-Kellog”, enunció la prohibición de la guerra como mecanismo de política nacional de solución de controversias, y cuya importancia radicó en haber sido el instrumento internacional que invocaron los jueces de los procesos de Núremberg como fundamento normativo del “crimen contra la paz”, a su vez que como norma consuetudinaria de la comunidad internacional (Córdoba, 2015).

Con posterioridad a la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 sobresalen como instrumentos de derecho internacional *sancionador* y de cooperación en el juzgamiento de criminales por sus conductas más repudiables, la Resolución 3 (I) del 13 de febrero de 1946 sobre “Extradición y castigo de los criminales de guerra” y la Resolución

3074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973 sobre los “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad” ambas de la Asamblea General de la ONU (Córdoba, 2015).

También se encuentra la Resolución A/56/83 de “Responsabilidad de los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos” de 28 de enero de 2002 que enuncia en su art. 2 la existencia de un hecho internacionalmente ilícito cuando a) es atribuible a un Estado bajo el derecho internacional y b) constituye el incumplimiento de la obligación internacional del Estado. De igual modo el art. 3 de la misma Resolución menciona que la categoría de un hecho internacionalmente ilícito la da el ordenamiento jurídico internacional y no la caracterización que le pueda dar los derechos internos⁵.

Conforme a lo anterior la doctrina ha denotado tres características del régimen internacional de responsabilidad de los Estados: i) si existe un quebrantamiento del derecho internacional verbigracia de los DD.HH., existe el deber de ofrecer una reparación; ii) los individuos de una nacionalidad pueden ser sujetos al interior del derecho internacional, tanto como sujetos de protección como partes en un proceso judicial, y iii) los Estados no pueden invocar su derecho nacional como medio de defensa legal en una disputa internacional para no reconocer la autoría y los daños producidos a las víctimas (Falk, 2006).

Medidas de reparaciones

El sistema internacional y los regionales de protección de Derechos Humanos son una instancia subsidiaria a las jurisdicciones estatales (Pastor, 2015). En consecuencia, actúan como *ultima ratio* cuando los Estados han faltado a sus obligaciones internacionales de protección y garantía a los derechos y libertades de las personas. En el caso americano el sistema cuenta con dos organismos como son la Comisión y la Corte que accionan su competencia al no existir remedio para encontrar justicia, luego de agotadas las instancias administrativas y judiciales en cada caso concreto, al igual que la inexistencia o

⁵ El Tribunal Permanente de Justicia Internacional con anterioridad en el siglo XX se había pronunciado en similar sentido, ver la providencia del 17 de agosto de 1923, *Case of the s.s. Winbledon*, pp. 29 y 30, y sentencia del 4 de febrero de 1932, *Treatment of Polish Nationals and other Peksons of Polish Origin or Speech in The Danzig Territory*, pp. 4 y 24.

insuficiencia de una tutela efectiva (Steiner & Uribe, 2014), que en palabras del Tribunal Interamericano de DD.HH.:

“[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente valido en la jurisdicción internacional de derecho humanos, por ser esta coadyuvante o complementaria de la interna” (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párrafo 64)⁶.

De esta manera, la Corte ha venido desarrollando al interior del sistema interamericano, la llamada *doctrina del control de convencionalidad* por medio de la cual los órganos estatales (jurisdiccionales y administrativos por ejemplo⁷) deben velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se veas menoscabadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, así como por el accionar del Estado y de sus funcionarios⁸, así las cosas, se debe tener en cuenta como frente a la aplicación del control de convencionalidad se deben tener en cuenta el texto de la Convención Americana sobre DDHH y la interpretación otorgada a dicho instrumento por parte del tribunal interamericano de San José en sus casos contenciosos y opiniones consultivas (Steiner & Uribe, 2014). Tal facultad que le reconoce la Corte a los órganos jurisdiccionales de los Estados para llevar a cabo el control de convencionalidad⁹ tiene asiento en el llamado agotamiento previo de los recursos internos, que en palabras del mismo Tribunal significa:

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se

⁶ En igual sentido se puede consultar: Caso Godínez Cruz vs. Guatemala, Sentencia de 20 de enero de 1989. (Ser. C) No. 5, párrafo 64 y Caso Fairén Garbí Y Solís Corrales vs. Honduras, Sentencia de 15 de marzo de 1989 (Fondo), párrafo 85.

⁷ Ver Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010. (Serie C.) No. 220, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

⁸ Ver Caso Almonacid Arellano et al con Chile. Corte IDH. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 124.

⁹ Frente a la aplicación del control de convencionalidad por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ver entre otras, el auto del 17 de septiembre de 2013, rad. 45092, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párrafo 123).

Asimismo, afirmó:

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones” (Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, párrafo 128).

En materia de reparaciones la jurisprudencia y la doctrina internacional han afirmado que su reconocimiento obedece a los estándares que ha establecido el derecho internacional de los derechos humanos (Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párrafo 62; Ferrer & Pelayo, 2014). A su vez la Corte Interamericana ha manifestado desde su primera providencia que el derecho a la reparación debe ser *adecuado* y *pleno* (restitutio in integrum) a las violaciones perpetradas, lo cual evoca i) el restablecimiento de la situación anterior, ii) el resarcimiento de las consecuencias que la infracción de los DD.HH. produjo, y iii) el pago a título de compensación por los daños patrimoniales y morales acaecidos (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párrafos 25 y 26; Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, párrafo 62).

Si bien es cierto que la Convención Americana sobre DD.HH. no reconoce *in explicito* las reparaciones desarrolladas por el Tribunal interamericano, si establece en su art. 63 numeral 1 el deber que tiene éste de disponer que al lesionado “se [le] reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización”, lo cual a su vez ha permitido que actualmente existan las diversas medidas de reparación a saber: i) restitución; ii) compensación; iii) rehabilitación; iv) satisfacción; y v) garantías de no repetición (Cassel, 2010).

No obstante, al interior de la Corte han existido dos etapas temporales, una entre 1989 y el 2000 donde se condenaban a los Estados a reparar a las víctimas a través de una indemnización mayoritariamente, y la segunda a partir de este último año y hasta la actualidad donde ha dictado además del resarcimiento del daño, medidas de acceso a la justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y acceso a la información (Cassel, 2010; Antkowiak, 2014). También el Tribunal regional ha definido que las medidas de reparación “consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial” (Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, párrafo 175).

Restitución

Busca restablecer la situación de la víctima a su estado anterior, puede variar dependiendo de si son derechos políticos, relacionados con la libertad, el trabajo y sus beneficios, así como la restitución de la propiedad (de Greiff, 2006). En el derecho internacional se tiene como antecedente de este tipo de reparaciones al Caso de las *Concesiones Mavrommatis en Jerusalén*, en donde el Tribunal Permanente de Justicia Internacional anuló la cláusula establecida en el art. 29 que abrogaba la facultad a una de las partes de expropiar la concesión Rutenberg al considerar que era ofensiva y violatoria del ordenamiento internacional, no obstante la inexistencia de un daño económico para la parte demandante (1925, serie A, No. 5: pp-37-38)

De igual modo la ya mencionada Resolución A/56/83 del 28 de enero de 2002 en su art. 35 la define como la forma de “restablecer la situación que existía antes de la comisión del

hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución: a) No sea materialmente imposible; b) No entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización.”, asimismo comprende “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes” (Resolución A/60/147 del 21 de marzo de 2006).

En relación con la jurisprudencia interamericana y como lo manifiesta Cassel (2010) este tipo de reparación ha tenido poco desarrollo debido a que gran parte de las víctimas de violación a los derechos humanos en el continente han sido asesinadas o desaparecidas. Sin embargo, la Corte ha determinado como manifestaciones de esta medida la reincorporación a puestos de trabajos¹⁰, la restitución del derecho de propiedad¹¹, brindar asistencia a las víctimas para que volvieran a su país del exilio en el que se encontraban¹², al igual que dispuso la libertad de prisión y de sanciones legales impuestas¹³.

Compensación

También llamada indemnización, es la manera más usual de reconocer a través de una cuantificación monetaria los daños sufridos (Shelton, 2005), esta medida es entendida más allá de lo meramente económico, de tal modo que sea pueda reconocer los daños físicos, psicológicos y morales (de Greiff, 2006). En el caso del Sistema de Naciones Unidas se ha entendido que opera cuando el daño no se ha podido reparar con la restitución, igualmente se reconoce que la indemnización cubre el lucro cesante (pérdida de ingresos), la pérdida de oportunidades (empleo, educación y prestaciones sociales), los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales (Resolución A/56/83 art. 36; Resolución A/60/147).

¹⁰ Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, párrafo 214.7; Caso De la Cruz Flores vs. Perú, párrafo 188 numerales 6 y 8; Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párrafo 192 numerales 1 y 2.

¹¹ Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, párrafo 191.8.

¹² Caso 19 comerciantes vs. Colombia, párrafo 295.10.

¹³ Caso Castillo Petrucci y otros vs. Perú, párrafo 226.13; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, párrafo 99 numerales 4 y 5; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, párrafo 248.5.

Este tipo de reparación siempre ha estado presente en las decisiones contenciosas de la Corte Interamericana, empero en dos casos de violación al debido proceso judicial se abstuvo de decretarlas, no obstante que ordenó al Estado no cobrar a las víctimas sanciones pecuniarias por cuanto de haberlo hecho la suma hubiera sido imposible de pagar (Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, párrafo 248.5; Caso Cantos vs. Argentina, párrafo 77.1). En relación con los estándares que tiene en cuenta la Corte para determinar la indemnización se tienen: i) el valor presente que tendría los ingresos de las víctimas —cuando son homicidios o desapariciones forzadas generalmente—; ii) la proyección y expectativa de vida; iii) las características sociales de las víctimas, y iv) en caso de no poderse determinar el ingreso se tendrá como esté el salario mínimo legal del país (Cassel, 2010), no obstante que parte de la doctrina considera que dicho estándares no son suficientes para apreciar la expectativa social de vida, verbigracia, los desarrollos académicos que pudo haber tenido la víctima (Rousset, 2011).

Rehabilitación

Son medidas que buscan un cuidado social, médico y psicológico a las víctimas, incluye asistencia legal al interior de los Estados y a nivel internacional (de Greiff, 2006; Carillo, 2006: Resolución A/60/147). La jurisprudencia interamericana las ha venido reconociendo desde el año 2001, aunque en 1993 en el caso Alobotoe vs. Surinam ordenó a reabrir la escuela sita en Gujaba y dotarla de personal docente y administrativo para que funcionare permanentemente a partir de 1994 (párrafo 116.5). Tres son los casos emblemáticos de este tipo de medidas: Barrios Altos (párrafo 50.3), Cantoral Benavides (párrafo 99.8), y Duran y Ugarte (párrafo 45.3) contra el Estado peruano, por cuanto fueron acordadas por las partes, y homologadas por la Corte. La Corte además se ha pronunciado frente a la aplicación de las medidas de rehabilitación a las víctimas y para ello ha afirmado:

“El tratamiento médico y psicológico debe brindarse por personal e instituciones estatales²⁶³. Al proveer dicho tratamiento se deben considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual” (Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, párrafo 256).

Correa (2014) por su parte afirma que de la lectura de la jurisprudencia interamericana se denotan ciertos requisitos para la prestación de estas medidas, entre los cuales se pueden encontrar: i) ser gratuitas, ii) prestadas por profesionales especializados, iii) ser brindadas en lugares cercanos accesibles a las víctimas, iv) deben incluir tratamientos familiares e individuales, y v) deben ser consentidas (Caso Gómez Lund vs. Brasil, párrafo 268)¹⁴. Igualmente se encuentra como parte de estas medidas el otorgamiento de becas de estudio, cuando las violaciones han ocasionado cambios en la vida de relación y el desarrollo personal (Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, párrafo 257¹⁵).

En el caso colombiano, Vargas (2014) ha diagnosticado a partir de la revisión de las resoluciones de cumplimiento de sentencias emanadas de la misma C. Interamericana, que la ejecución de las medidas de rehabilitación en salud por parte del Estado, ha sido un proceso arduo que a la fecha actual no ha permitido la ejecución completa a favor de las víctimas-beneficiarias de dicha reparación en las 9 sentencias analizadas por el autor. Asimismo, se observa en análisis realizado como, por una parte, el mecanismo de seguimiento que actualmente tiene la Corte es inoperante, y por otra el proceso de concertación de dichas medidas entre los entes estatales y las víctimas, se presenta como un nuevo espacio de prolongación del contencioso en el cual difícilmente se llegan a acuerdos frente a la interpretación y alcance de las medidas a ejecutar. Tal aseveración nace de consultar diversas sentencias de seguimiento a las reparaciones decretadas en los casos en

¹⁴ Afirma la Corte Interamericana en el párrafo referenciado: *“En particular, el tratamiento psicológico o psiquiátrico debe brindarse por personal e instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas de hechos como los ocurridos en el presente caso. En caso de que el Estado careciera del personal o de las instituciones que puedan proveer el nivel requerido de atención, deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil especializadas. Al proveer dicho tratamiento se deben considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas, después de una evaluación individual³⁸³. Finalmente, dicho tratamiento se deberá brindar, en la medida de las posibilidades, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia. Las víctimas que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica.”*

¹⁵ Por su parte en esta oportunidad el Tribunal regional denoto *“[...] la Corte estima oportuno ordenar, como medida de satisfacción, que el Estado otorgue becas en instituciones públicas mexicanas, en beneficio de la señora Rosendo Cantú y de su hija, Yenys Bernardino Rosendo, que cubran todos los costos de su educación hasta la conclusión de sus estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios. El cumplimiento de esta obligación por parte del Estado implica que las beneficiarias lleven a cabo ciertas acciones orientadas al ejercicio de su derecho a esta medida de reparación. Por lo tanto, quienes soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, para que den a conocer al Estado sus solicitudes de becas.”*

donde Colombina fue hallada responsable de la violación de DD.HH. por desaparición forzada (ver Córdoba Díaz, 2015).

Satisfacción

A continuación, se hace una exposición somera y genérica sobre este tipo de medidas según los mecanismos de protección regional e internacional de Derechos Humanos, haciendo la salvedad, que al ser el epicentro de la presente tesina, posteriormente se abordará de manera más concreta y detallada cada uno de los elementos que la conforman. Se entiende como una reparación particular para los daños morales, tales como las lesiones emocionales, los sufrimientos psicológicos, los perjuicios a la reputación, honra y dignidad de las víctimas (Falk, 2006; Carrillo, 2006), al igual que ser una ayuda para reorientar la vida y la memoria (Calderón, 2013), de tal forma que el Estado esté obligado a otorgar esta medida cuando el perjuicio causado por la violación al régimen internacional no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización, consistiendo en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada.

Esta medida no debe ser desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable (Resolución A/56/83 art. 37), que en palabras de la Corte buscan “el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso” (Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, párrafo 268).

Varias son las modalidades de las medidas de satisfacción ordenadas por la Corte, sin embargo, han sido tres de ellas únicas en su género a saber, i) que el Estado se abstuviese de condenar a pena de muerte a una persona (Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, párrafo 215), ii) la conmutación de dicha pena (Caso Boyce y otros vs. Barbados, párrafo 127), y iii) la búsqueda de unos niños que se encontraban desaparecidos (Caso de Las Hermanas Serrano Cruz, vs, El Salvador, párrafo 180). Vale resaltar lo afirmado por Shelton (2005) en el sentido de referenciar como algunos doctrinantes excluyen a la medida de satisfacción de las reparaciones, al considerar que en

algunas oportunidades y dependiendo del caso-concreto únicamente éstas últimas se refieren a una compensación monetaria.

También la Resolución A/60/147 del 21 de marzo de 2006 establece¹⁶:

“La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.”

Garantías de no repetición

Son comprendidas como el compromiso por parte del Estado de que los hechos por los cuales fue declarado internacionalmente responsable no se vuelvan a perpetrar¹⁷. Dentro de esta modalidad de reparación se encuentran la cesación de las violaciones, la verificación de los hechos, así como la investigación y juzgamiento de los perpetradores (de Greiff, 2006). La doctrina ha dividido estas garantías de no repetición en dos grupos, el primero relacionado con capacitación, formación y educación en protección de los derechos

¹⁶Ver providencia de reparaciones del Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.

¹⁷ Resolución A/56/83 art. 30.

humanos a los funcionarios públicos, el segundo que contiene la adopción de medidas en el derecho interno (Calderón, 2013).

Respecto al primer grupo, fueron los Casos Del Caracazo vs. Venezuela, y Trujillo Oroza vs. Bolivia ambos del 2002, las primeras sentencias del tribunal interamericano que reconocieron la necesidad de educar a los funcionarios estatales especialmente el del sector castrense en protección y respeto por los derechos humanos, así en palabras de la Corte:

“Dadas las circunstancias particulares del presente caso, este Tribunal considera importante fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano mediante la capacitación de funcionarios públicos, a fin de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan. En relación con la capacitación en materia de protección de derechos humanos, en su jurisprudencia la Corte ha considerado que ésta es una manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus capacidades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas” (Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, párrafo 346).

Con relación al segundo grupo se puede encontrar como la Corte lo ha considerado una manifestación del deber contenido en el art. 2 de la Convención que al tenor dice: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”¹⁸. De igual forma al interior de este grupo lo que se busca es generar cambios que afecten de forma positiva el estado social, legal y político de las instituciones y de la normatividad de los Estados parte (Carrillo, 2006).

Consecuente con lo anterior se ha pronunciado en sus providencias de la siguiente forma:

“[...] El deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier

¹⁸ Respecto a los diferentes tipos de estas medidas en la jurisprudencia interamericana se puede consultar a Calderón (2013), pp.191-193.

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio de los inculpadados, lo que debiera realizar a la luz del artículo 2 de la Convención” (Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, párrafo 207).

Por su parte la otrora mencionada Resolución A/60/147 dispone que:

“Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.”

CAPÍTULO 2

MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO

Fundamento legal¹⁹

Se ha entendido que, al interior del ordenamiento jurídico colombiano, el derecho a la reparación por los agravios perpetrados con ocasión de la violación a los Derechos Humanos, tiene estrecha relación con el principio de la dignidad humana reconocido en la Carta Política en su art. 1. (Sentencia C-228 de 2002). Constitucionalmente, el fundamento de la reparación de las víctimas de la violencia, se encuentra en numerosos artículos de la Carta de 1991 tales como el 1, 2, 12, 29, 93, 229 y 250 núm. 6 y 7 (Sentencia C-753 de 2013). En relación a lo anterior, el Tribunal Constitucional colombiano, se ha permitido afirmar frente a los preceptos superiores, lo siguiente *in extenso*:

“(i) en el mandato según el cual los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el Constituyente ha otorgado rango constitucional a los derechos de las víctimas (Art. 250 núm. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art. 1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la intervención de las víctimas tanto en los procesos judiciales como administrativos para obtener su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (vi) en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra una cláusula

¹⁹ Desde una perspectiva histórica consúltese a Cano & Caro, 2011: 456-460.

general de responsabilidad del Estado; (vii) en el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (viii) en el derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12); (ix) así como en la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, los cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto” (Sentencia SU-254 de 2013).

Por su parte, el Consejo de Estado se ha permitido disgregar la función del juez administrativo en la consecución de los fines constitucionales del Estado colombiano, especialmente lo que tiene relación con la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los habitantes del territorio nacional, así ha dicho:

“[...] cuando se habla del análisis de hechos relacionados con la violación de derechos humanos, según los parámetros normativos y descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política y en las normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la de establecer y decretar el resarcimiento económico de un perjuicio [...] debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación integral se vea claramente materializado.

(...)

De allí que, la labor del juez de lo contencioso administrativo, en tratándose de los procesos que se formulen para su conocimiento, con ocasión de la vulneración o trasgresión de derechos humanos, es la de un funcionario dinámico, con amplias facultades resarcitorias y de restablecimiento, suministradas éstas por el propio ordenamiento jurídico interno e internacional, encaminadas a que se obtenga una verdadera reparación integral del daño derivada de ese quebrantamiento” (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de febrero de 2008. radicación 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996).

El reconocimiento en la legislación interna de las medidas de reparación²⁰ se puede observar, entre otros, en el capítulo XI de la Ley 975 de 2005²¹ *“por la cual se dictan*

²⁰ Se puede consultar a modo de antecedentes la expedición de la Ley 418 de 1997, específicamente su art. 49 y el Decreto 1290 de 2008 en su art. 4, de igual modo puede verse un análisis de dicha Ley en la Sentencia T-417 de 2006.

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”; los artículos, 25, 69, 70, 71, 135-152 de la Ley 1448 de 2011 “*por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones*”.

Del mismo modo, los artículos 131, 146-219, 222-235 del Decreto Ley 4800 de 2011 que tiene por objeto *establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011*; los artículos 13, 14, 109-131 del Decreto Ley 4633 de 2011 “*por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas*”; el título III (artículos 75-90) del Decreto Ley 4634 de 2011 el cual estableció *la necesidad de regular los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras a la atención, reparación integral y de restitución de tierras de las víctimas*, y los artículos 16, 79-101 del Decreto Ley 4635 de 2011 que regula lo concerniente a *las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras*.

Desarrollo jurisprudencial

La Corte Constitucional ha afirmado en su jurisprudencia reciente²² y a propósito de sus pronunciamientos frente a las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, el derecho a la reparación integral de las víctimas de conductas punibles por ocasión de violación a los derechos humanos: i) tiene asiento en la norma fundamental al tenor de lo dispuesto en su

²¹ Dicho capítulo se compone de los arts. 42 a 55, de los cuales del 42 al 48 reconocen las diversas medidas de reparación, sin embargo, salvo los arts. 44 y 46, los demás que tiene relación con la reparación (42, 43, 45, 47 y 48), fueron derogados por la Ley 1592 de 2012.

²² Ver entre otras: SU-254 de 2013, C-820 de 2012, C-715 de 2012, T-159 de 2011, T-085 de 2009, T, 821 de 2007, C-370 de 2006, C-228 de 2002, T-159 de 2011, T-076 de 2011.

art. 250 numeral 6 (Sentencia C-782 de 2012)²³; ii) es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado que corresponde garantizar al Estado (Sentencia C-753 de 2013); iii) es una obligación estatal de adoptar “todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación” (Sentencia C-454 de 2006); iv) es una “aplicación de la regla consuetudinaria según la cual toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor” (Sentencia T-458 de 2010); y v) en la contemporaneidad se enfoca a que el resarcimiento del daño no solo debe ser equiparable económicamente, sino que debe estar relacionado con obtener la verdad y justicia de lo sucedido a través de un proceso judicial con todas las garantías fundamentales (Sentencia C-228 de 2002).

A su vez, el Consejo de Estado en declaración sobre la responsabilidad administrativa del Estado colombiano dijo que una noción amplia de reparación, debe ir más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo; por lo que el juez en este caso, el contencioso, lo que debe hacer es incluir bienes jurídicos de talla supra legal, verbigracia la dignidad y los Derechos Humanos, que si bien generalmente no pueden ser apreciados monetariamente, si pueden resultar lesionados por el Estado o el victimario, y por tanto ser reparados mediante compensación (Núñez & Zuluaga, 2012), igualmente se manifestado del siguiente modo:

“La reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos, máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones tienen origen en delitos o crímenes que son tipificados como de lesa humanidad” (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de febrero de 2008. radicación 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996).

²³ También se pueden consultar las siguientes providencias: C-591 de 2005, T-1057 de 2007 y C-516 de 2007.

En la providencia que conoció de la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 975 de 2005, el máximo Tribunal observó el desarrollo alcanzado por el derecho constitucional colombiano, y conforme a la cláusula del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la C.P.) afirmó que las víctimas tanto directas como sus familiares “que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos, tienen derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. [...] la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la violación” (Sentencia C-370 de 2006).

Conforme a lo anterior, la Corte ha venido construyendo una sólida línea jurisprudencial con los siguientes parámetros y elementos constitucionales de la reparación (Sentencia C-715 de 2012):

1. Es un derecho internacional y constitucional de las víctimas de violaciones de derechos humanos el reconocimiento expreso a la reparación del daño causado;
2. El derecho a la reparación integral y las medidas que incluye, se encuentran regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, lo cual no puede ser desconocido y debe ser respetado por los Estados;
3. El derecho a la reparación es integral, entendiendo por tal, el deber estatal de adoptar distintas medidas determinadas por la justicia distributiva y por la justicia restaurativa, en cuanto el fin último es dignificar y restaurar plenamente el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas;
4. Las obligaciones de reparación incluyen, en principio y preferentemente, la restitución plena (*restitutio in integrum*), que es el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida como una situación de garantía de sus derechos fundamentales;
5. De no ser posible el restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado;

6. La reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, medidas como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición;
7. El derecho a la reparación integral supone i) el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima; ii) la indemnización de los perjuicios; iii) la rehabilitación por el daño causado; iv) medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; v) así como medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan;
8. La reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión individual (restitución, indemnización y readaptación o rehabilitación) como colectiva (medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad);
9. Una medida importante de reparación integral es el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación, donde la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos;
10. El derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, en tal sentido, incluye medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica, así como a que se haga justicia, se investigue y sancione a los responsables;
11. La reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado. Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos garantías sociales, prestacionales o derivadas de políticas públicas, y la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como título la comisión de un

ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas o asimilarlas.

En sede de Tutela el Tribunal ha clarificado que “[e]l daño acaecido por la violación flagrante de los derechos humanos, genera a favor de la víctima el derecho fundamental a la reparación de los perjuicios directamente ocasionados con la trasgresión, a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición [...]. La exigencia y la satisfacción de este derecho fundamental se dan independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario, debido a que aquel deriva [sic] precisamente de la condición de víctima, cuyos derechos corresponde al Estado salvaguardar, sin perjuicio de que pueda repetir contra el autor” (Sentencia T-085 de 2009, reiterado en T-367 de 2010 y T-603 de 2011).

Además, en sentencia de reciente data, el Tribunal Constitucional colombiano a propósito de la complementariedad entre el corpus internacional de los DD.HH. y el DIH y sus efectos en el orden interno expresó:

“En suma, tanto el DIDH como el DIH se encargan de proteger un conjunto de derechos humanos que deben ser respetados en todo momento y lugar frente a cualquier tipo de agresión violenta, sea ésta producto de una confrontación bélica o no. El derecho a la vida, a la integridad personal, a la honra, la libertad individual y el debido proceso, son contenidos jurídicos esenciales protegidos por ambos cuerpos jurídicos, y constituyen un conjunto irreductible de bienes jurídicos que no pueden ser objeto de vulneración o de amenaza, ni siquiera bajo las condiciones extremas del *casus belli*.

Por tal motivo, no son admisibles, ni ante la comunidad internacional, ni en el ordenamiento jurídico interno colombiano, las graves violaciones a los derechos humanos, ni los crímenes de guerra como los homicidios en persona protegida, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, los ataques contra la dignidad de la persona, la toma de rehenes, los juicios sin garantías y las penas sin apego al principio de legalidad. Además, en ambos casos se trata de ordenamientos supranacionales que hacen parte del *ius cogens*, esto es, del conjunto de normas imperativas de derecho internacional, y por tanto han sido entendidos como intangibles” (Sentencia C-084 de 2016).

Al igual que con anterioridad había afirmado acerca de la prevalencia del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento interno al tenor de las siguientes reglas:

“(…) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la Constitución”, como sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales ‘prohíben su limitación en los Estados de Excepción’, es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los Estados de Excepción”, caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional que deben ser respetados por el legislador” (Sentencia C-327 de 1997, reiterado en C-148 de 2005).

En ulterior lugar se debe tener en consideración como la jurisprudencia constitucional ha denotado que en “materia de interpretación de derechos contemplados tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, existen unos cánones interpretativos como son: a) El derecho interno consagra un mínimo de protección, de tal manera que los Estados no pueden otorgar menos del mínimo, pero si pueden proteger más halla del mínimo [sic]. Cuando se presenta esta última situación debe aplicarse la norma más protectora, esto es la norma de derecho interno.” (Sentencia C-170-04).

En la jurisdicción ordinaria, la Sala de Casación Penal de la C. Suprema de justicia ha afirmado:

“El derecho a la reparación comporta las labores de: (i) Restitución: devolver a la víctima a su statu quo ante. (ii) Indemnización: sufragar el valor material de los perjuicios morales, materiales y de la vida de relación irrogados. (iii) Rehabilitación: recuperar a las víctimas de las secuelas físicas y sicológicas derivadas de los delitos cometidos. (iv) Satisfacción: compensación moral orientada a restaurar la dignidad de la víctima y divulgar lo acontecido. (v) Garantía de irrepetibilidad: desmovilización, desarme, reinserción, desmonte de las organizaciones delictivas y prohibición, en todas sus formas y expresiones, de la conformación de grupos armados paraestatales y el diseño de estrategias paramilitares.

(vi) Reparación simbólica: aseguramiento de la memoria histórica, aceptación pública de la comisión de delitos, perdón difundido y restablecimiento de la dignidad de las víctimas, v. gr. la construcción de camposantos, de monumentos o la colocación de placas en sitios especiales. (vii) Reparación colectiva: recuperación psicológica y social de las comunidades victimizadas.

La reparación por vía administrativa inicialmente asumida por el Estado puede resultar adecuada para asegurar la indemnización, e inclusive la restitución, en tanto que la vía judicial ofrece mejores posibilidades para la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición.” (Sentencia de 27 de abril de 2011).

Igualmente, se ha reconocido que el deber de reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, se deriva de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en la protección y respeto a las garantías fundamentales de las personas, mandato que también se encuentra reconocido en la norma superior, específicamente en sus arts. 9 y 93 numeral 2, en donde a través de este último que consagra el llamado bloque de constitucionalidad, surten efectos internos algunos instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de reparación y restitución a víctimas²⁴, tales como la Convención Americana de Derechos, los Principios de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet, así como las recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia C-715 de 2012)²⁵, o en palabras del Consejo de Estado:

“[E]l juez de lo contencioso-administrativo debe asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que le traza el ordenamiento jurídico interno, así como el internacional; toda vez que la protección de los derechos humanos se ha convertido en un aspecto de

²⁴ Ver sentencia C-370 de 2006.

²⁵ Al tenor dice el Tribunal Constitucional colombiano en la mentada providencia: “Adicionalmente, existen instrumentos de derecho internacional especializados en el tema de reparación y restitución a víctimas, los cuales en ejercicio de sus competencias, fijan pautas y principios de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por ser parte integral del bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos, los Principios de Pinheiro, los Principios de Van Boven; los Principios Joinet. Así mismo, existen recomendaciones y pronunciamientos de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

regulación positiva que ha desbordado las barreras que, tradicionalmente, habían sido fijadas por los Estados en su defensa acérrima del principio de soberanía nacional” (Sección tercera, Sentencia de 20 de febrero de 2008. exp. 16.996).

También, la doctrina ha dicho que las sentencias de la jurisdicción contenciosa-administrativa que han condenado al Estado colombiano a reparar a las víctimas a partir de los estándares emanados por la Corte Interamericana de DD.HH. se dividen en dos grupos: i) las que decidieron en el ámbito administrativo doméstico algunos casos que posteriormente fueron juzgados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ii) las que retomaron y utilizaron la jurisprudencia interamericana como fuente de derecho, al momento de definir las reparaciones en las sentencias que colocaron fin a procesos de reparación directa exclusivamente internos (Escobar, Benítez y Cárdenas, 2011: 172).

Baste recordar el estudio realizado por diversas instituciones públicas y privadas lideradas por la Universidad de los Andes que diagnosticaron lo siguiente a propósito del desarrollo de la Ley de Justicia y Paz (Rettberg, 2008: 69):

- a)** En relación con las tres formas preferidas de reparación, se encontró i) cubrimiento de necesidades económicas (45,5%), ii) el establecimiento de la verdad sobre los hechos (44%), y iii) solicitud de perdón.
- b)** En el caso de las víctimas del secuestro, ellas otorgan máxima importancia a la compensación por la pérdida y los daños causados, y las víctimas de tortura, para quienes la segunda reparación más importante es la garantía de no repetición.
- c)** En los casos de victimización en la familia, las reparaciones en su orden son i) dinero para compensar la pérdida y los daños causados (48,7%), ii) ayuda para cubrir necesidades económicas propias y de la familia (46,1%), iii) garantías que no van a volver a ocurrir los hechos (40,8%), y iv) saber la verdad sobre los mismos.
- d)** Las víctimas de desplazamiento también otorgan el principal peso a las medidas de reparación materiales: cubrir necesidades económicas con un 47,2%, y compensación por los daños (40,8%).
- e)** Para las víctimas de desaparición, de lejos la medida de reparación preferida es saber la verdad (51%). Para quienes reportan tortura como forma de victimización

en su familia, la segunda medida de reparación es la garantía de no repetición (40,7%).

La reparación como derecho fundamental

La reparación es catalogada como un derecho fundamental por dos razones²⁶: 1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición, ajustándose a los estándares internacionales en la materia (Sentencia C-753 de 2013).

Reparación administrativa

Genéricamente cuenta con las siguientes características²⁷: i) tiene el propósito de atender situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos de manera igualitaria y equitativa; ii) la responsabilidad administrativa se fundamenta en el artículo 2 de la CP, el cual consagra que el Estado es garante de los derechos fundamentales; y en la imposibilidad o falta de previsión del ilícito por parte del Estado, lo que causa el daño a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; iii) las reparaciones administrativas son integrales, estando compuestas por diferentes mecanismos como la restitución, la compensación, la indemnización, la rehabilitación, y las medidas de no repetición; iv) no obstante lo anterior, las reparaciones administrativas no pretenden la restitución plena o *in integrum* de los daños causados a las víctimas, sino que están guiadas por el *criterio o principio de equidad*, en razón a que la masividad hace prácticamente imposible determinar exactamente la dimensión del daño sufrido. Por consiguiente, se fijan montos máximos de indemnización y se prevén programas estatales de diferente índole, que buscan incluir masivamente a las víctimas para su reparación, y con ello garantizar la igualdad de todas ellas; v) existe una flexibilización probatoria, de manera que solo se exige una prueba sumaria, tanto de la

²⁶ Consultar Sentencia T-089 de 2005.

²⁷ “[L]a reparación administrativa no significa el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derecho, sino en su responsabilidad como garante de la seguridad y de los derechos de todas las personas y de la falta o imposibilidad de prevención del ilícito causante del daño ocasionado a las víctimas” (Sentencia C-753 de 2013).

condición de víctima, como del daño sufrido, y llega a invertirse el principio de carga de la prueba de la víctima al victimario, pudiendo consagrarse igualmente presunciones legales o de derecho; vi) a diferencia de los jueces que conocen de procesos penales o contenciosos administrativos, las reparaciones administrativas se encuentran a cargo de autoridades de carácter administrativo, como en la actualidad lo es la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas de conformidad con la Ley 1448 de 2011; y vii) es una vía fácil, rápida y efectiva para las víctimas (Sentencia C-286 de 2014).

Bajo una perspectiva de reparación individual, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que debe contener²⁸ como mínimo los siguientes elementos a propósito de la aplicación del Decreto 1290 de 2008 -derogado y predecesor de la actual Ley de Víctimas-: (i) comprende regulaciones dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; (ii) coloca en cabeza del Estado el programa de reparación individual; (iii) establece el principio de solidaridad como base de la reparación individual administrativa por violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas atribuibles a grupos armados al margen de la ley; (iv) estipula quiénes son destinatarios o beneficiarios de tal derecho, (v) establece cuáles son las medidas de reparación, (vi) cuáles son los distintos organismos del Estado que deben hacerse cargo de esas medidas, y (vi) cuáles son los trámites y plazos para el reconocimiento de la indemnización, entre otras disposiciones (Sentencia T-722 de 2008).

Desde un ámbito colectivo o comunitario, las víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte de grupos armados al margen de la ley o de personal del Estado, tienen derecho a una reparación *social* que le exige a este último, la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia (Sentencia T-458 de 2010), puede observarse al respecto la Ley 1448 de 2011 en sus artículos 151 y 152 que establece como modalidad de resarcimiento la reparación colectiva.

Reparación judicial

²⁸ La vía administrativa para la reparación integral a las víctimas, se encuentra actualmente regulada por la Ley 1448 de 2011 en el Título IV.

Esta vía jurisdiccional puede ser de naturaleza punitiva o contencioso-administrativa (Sentencia C-286 de 2014), y su énfasis radica en el reconocimiento de justicia a personas individualmente consideradas a partir de la violación a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Asimismo, por medio de los órganos jurisdiccionales del Estado, se articula la investigación y sanción de los responsables, la verdad en relación a las circunstancias de la violación, y las medidas reparatorias del daño antijurídico a través de la restitución, compensación y rehabilitación de la víctima (Sentencia SU-254 de 2013).

La reparación dentro del proceso penal se caracteriza por: i) desprenderse del incidente de reparación integral, que se da luego de la investigación y sanción de los responsables del delito en cada caso en concreto; ii) su efecto solo es para las víctimas que acuden al proceso penal; iii) debe demostrarse procesalmente la dimensión, cuantía y tipo del daño causado, para determinar de manera proporcional e integral la indemnización a las víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación simbólica y las garantías de no repetición; iv) está basada en el criterio de *restitutio in integrum*, para compensar a las víctimas en proporción al daño que han padecido; y v) los responsables patrimoniales primordiales son los victimarios, subsidiariamente y de manera excepcional, el Estado²⁹ (Sentencia C-286 de 2014).

La reparación al interior de la jurisdicción contencioso administrativa³⁰ tiene los siguientes elementos: i) establecer la responsabilidad del Estado por acción u omisión frente al daño causado a la víctima, de conformidad con el artículo 90 constitucional³¹; ii) tiene efecto

²⁹ La Corte en la Sentencia T-085 de 2009 señaló lo siguiente: “la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por estos”.

³⁰ “[...] es claro que prevalece la regulación internacional, que reconoce y regula derechos humanos –a nivel normativo e interpretativo–, frente al sistema interno, es ostensible que el juez de lo contencioso-administrativo cuenta con diversas herramientas e instrumentos dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del quebrantamiento de derechos humanos, cuando quiera que sean Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano sometidas a su consideración, con miras al resarcimiento del perjuicio” (Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de 20 de febrero de 2008. exp. 16.996)

³¹ “[...] en la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una persona” (Sentencia C-430 de 2000).

solo para las víctimas que acuden a la jurisdicción contenciosa; iii) el juez identifica tanto los daños materiales como morales causados a la víctima por la acción u omisión estatal y fija el monto indemnizatorio³²; iv) el único responsable de la reparación es el Estado³³; v) la reparación a través de la vía contencioso administrativa por responsabilidad del Estado es de conformidad con el artículo 90 Superior, y la Ley 1437 de 2011³⁴ (Sentencia C-286 de 2014).

Afirma la jurisprudencia constitucional como se “ha establecido que el restablecimiento de los derechos de las víctimas debe llevarse a cabo no solamente por la *vía judicial*, sino también por la *vía administrativa*; y no solamente desde una perspectiva *retributiva*, sino también desde un enfoque *restaurativo o reparador*; así como incluir medidas no solo de carácter *individual* sino *colectivo*. Todo ello con el fin de buscar transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto y a la violación grave, masiva y sistemática de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario” (Sentencia C-286 de 2014).

Además, la doctrina analizando el periodo comprendido entre 1992 y el 2015 acerca de la emisión de sentencias reparadoras por parte del Consejo de Estado ha encontrado que existen dos periodos, el primero entre 1992 y 2008 que se circunscribe a determinar las reparaciones como de naturaleza netamente económica conforme al paradigma clásico del derecho administrativo continental³⁵, a través de la liquidación de los perjuicios morales y materiales, y donde los desarrollos conceptuales de la C. Interamericana aun no eran tenidos en cuenta (Escobar, Benítez y Cárdenas, 2011: 174); el segundo a partir del 2008 y hasta la actualidad donde se evidencian a grandes rasgos las siguientes medidas

³² El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 estableció los términos de valoración del perjuicio en cualquier proceso judicial, disponiendo: “Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

³³ Dos son los elementos sobresalientes y de relevancia constitucional que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia a saber: i) la definición de un daño antijurídico, entendido como una carga que la persona no tenía la obligación de soportar, y (ii) la determinación de un modelo argumentativo que soporte la reparación integral de tal perjuicio (Sentencia T-464 de 2011).

³⁴ Desde la jurisprudencia contenciosa-administrativa de antaño, el Estado tiene la posición de garante respecto de las personas bajo su jurisdicción, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de sujeción e indefensión, conforme a ello, los deberes de seguridad y protección se derivan de la Constitución y de la ley (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 15.567).

³⁵ Frente a este periodo se pueden observar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de diciembre de 1993. Exp. 8493 y Sentencia de 15 de enero de 1996. Exp. 10827.

reparadoras: i) publicación de la providencia en un lugar del municipio o entidad pública, ii) acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, iii) implantación de sistema de promoción de derechos humanos y iv) atención psico-social a las víctimas³⁶ (Núñez y Zuluaga, 2012: 225).

No obstante, en algunas providencias del segundo periodo en comento se ha determinado como reparaciones:

- 1) i) Iniciar las investigaciones correspondientes para efectos de determinar la posible comisión de delitos, ii) la fijación de una placa, en los lugares objeto de discusión procesal, con el fin de que “las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso”, y iii) cómo garantía de no repetición de los hechos el Estado debía enviar una copia de algunos apartes de la sentencia del Consejo de Estado, a cada una de las dependencias que integran la Fuerza Pública que operan actualmente en el país, con un fin esencialmente pedagógico, la cual debía ser firmada por el Ministro de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Militares, así como por cada uno de los Comandantes de las Fuerzas (Ejército - Armada - Fuerza Aérea) y el Director General de la Policía Nacional³⁷.
- 2) i) Ofrecer disculpas a las víctimas del daño causado por el Estado, en las instalaciones administrativas de la entidad, ii) iniciar las investigaciones correspondientes para determinar la posible comisión de un delito, con el propósito de que las víctimas conozcan la verdad de lo sucedido frente a posibles violaciones de Derechos Humanos, iii) crear en la página electrónica de la entidad un vínculo a través del cual se pudiese acceder durante seis meses el texto de la providencia del Consejo de Estado, y iv) enviar copia íntegra de la sentencia a todas las Unidades de la entidad³⁸.

³⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de enero de 2009. Rad. 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340).

³⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad. 20001-23-31-000-1998-03713-01(18436).

³⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2010. Rad. 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960).

Sin embargo, el doctrinante Noguera considera que el mecanismo procesal interno consagrado en el derecho administrativo colombiano, “no tiene la potencialidad de satisfacer los derechos de las víctimas por cuanto su enfoque parte de un supuesto distinto a las obligaciones estatales frente a los derechos humanos y por el contrario, se limita a verificar la ocurrencia de un daño imputable al Estado, independientemente de si los hechos constituyen o no violaciones de derechos humanos” (2010: 113), lo cual contrasta con el desarrollo que ha tenido el Sistema Interamericano de DD.HH, que en palabras del mismo autor:

“Frente al alcance del derecho a la reparación integral es evidente que el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos concede y garantiza de manera amplia y algo desarrollada un alcance mayor del derecho a obtener reparaciones; en tal criterio se estima que las graves violaciones de los derechos humanos deben ser reparadas en su justa medida a la violación. Mientras tanto, como se vio supra, la acción de reparación directa en lo contencioso administrativo no es el recurso idóneo y efectivo para demandar al Estado por graves violaciones de los derechos humanos; y en esa medida, no se establece que a partir de tal acción se pueda establecer la responsabilidad del Estado por tales hechos, únicamente por fallas en el servicio, al margen de la grave responsabilidad de servidores públicos en su acción u omisión” (Noguera, 2010: 116).

Reparación integral

Desde una óptica de la C. Constitucional, la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas del conflicto y de violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se encuentra enmarcada bajo los criterios de proporcionalidad y adecuación o también denominada correspondencia. En relación con el primer requisito, se entiende que debe existir una adecuación justa entre el daño y su resarcimiento, procurando que su contenido sea medible y equivalente al perjuicio causado en todos los aspectos, verbigracia, físico, moral, psicológico, familiar, entre otros tantos; siendo exigible incluso cuando la reparación no se traduzca en indemnizaciones. El segundo criterio se refiere a que la reparación debe considerar el carácter y gravedad de las acciones que ocasionaron el daño, permitiendo involucrar los aspectos no materiales tanto del perjuicio como de la forma de repararlo (Sentencia C-438 de 2013).

Ya en jurisprudencia anterior y con ocasión del examen de constitucionalidad del art. 97 de la Ley 599 de 2000 -Código penal-, la Corte explicó: “la tendencia ha sido a reconocer el derecho de las víctimas a ser reparadas íntegramente, con el fin de restablecer las cosas a su estado inicial (*restitutio in integrum*), y cuando ello no es posible, a ser compensadas por los daños sufridos. Esta reparación incluye tanto daños materiales como morales. Comprende tradicionalmente el *damnum emergens*, el *lucrum cesans* y el *preium doloris*, incluye la posibilidad de exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de la sentencia judicial. La reparación del daño ocasionado por el delito tiene como finalidad dejar a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo” (Sentencia C-916 de 2002).

Medidas de restitución

En relación con el derecho a la restitución como medida de reparación, en la Sentencia T-085 de 2009 se afirmó que: “[...] es “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía”, es decir, para el caso de las personas víctimas de la vulneración de los derechos fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos, “la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.

Con anterioridad la Corte había dicho que “[la] *restitución* se realiza a través de acciones orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, tiene un alcance que trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos sus derechos que le permitan continuar con una vida normal en su entorno social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico” (Sentencia T-979 de 2005).

Indemnización

Tiene la finalidad de compensar monetariamente los perjuicios económicamente causados y que puedan ser evaluados. Esta medida debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de las normas internacionales de Derechos Humanos o del Derecho

Internacional Humanitario, y a las circunstancias del caso concreto. La indemnización reviste una importancia fundamental desde una perspectiva simbólica ya que, supone el reconocimiento del daño provocado a las víctimas en contextos de conflicto armado o violencia organizada, además, que contribuye a reforzar la observancia de normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y promueve la confianza civil en el Estado y sus instituciones (Sentencia C-753 de 2013).

La Ley 975 de 2005 la identifica como la compensación de los perjuicios causados por la conducta punible (art. 8). Igualmente, la C. Constitucional ha establecido que este tipo de medida opera para lograr el resarcimiento de los daños generados por el ilícito y que sean cuantificables económicamente, como son los daños físicos, mentales, materiales; la pérdida de oportunidades de desarrollo; y la pérdida de ingresos, entre los que se incluyen el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad, las disminuciones patrimoniales (Sentencia C-979 de 2005), y los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales (Sentencia C-753 de 2013).

Al interior de la jurisprudencia contenciosa-administrativa³⁹, por ejemplo, el daño inmaterial por ocasión de la conducta de desplazamiento interno forzado ha sido tasado a toda persona desplazada en 50 salarios, mitad de la suma atribuida a cónyuge, padres e hijos en caso de un delito de homicidio (100 salarios). Tal criterio ha sido esbozado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su Sala de Justicia y Paz en caso connotados por la opinión pública nacional como los de alias “Diego Vecino” y “Juancho Duque” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013: 215).

La Ley 1448 de 2011 por su parte en sus arts. 132 a 134 consagra las disposiciones sobre indemnización administrativa, y en el art. 132 párrafo tercero enuncia como mecanismos adicionales a esta, los subsidios, y la adjudicación o adquisición de tierras entre otros⁴⁰, sin que por ello implique, la reducción o afectación de la compensación en dinero prevista en la normatividad vigente del ordenamiento patrio (Sentencia C-462 de 2013).

Rehabilitación

³⁹ Consultar in extenso a Cárdenas y Suarez (2014).

⁴⁰ Ver Sentencia SU-254 de 2013.

Esta medida se encuentra reconocida al interior del derecho colombiano desde su consagración legal en el modelo de justicia transicional, creado por la ya referenciada Ley 975 de 2005, que en su art. 8 de la consagra como “las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito”. Al interior de la jurisprudencia constitucional este tipo de medidas ha sido entendida como “las acciones que buscan restablecer la salud de las víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna” (Sentencia C-1199 de 2008). La ley 1448 de 2011 en sus arts. 125 a 138, consagra de extensa y pormenorizada las medidas de rehabilitación.

Medidas de satisfacción

Desde una vista colectiva, la Corte Constitucional las ha entendido como “la adopción de medidas [de carácter general] encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas” (Sentencia SU-254 de 2013). La ley 1448 de 2011 en su título VII, capítulo IX, establece las medidas de satisfacción.

Garantías de no repetición

El Tribunal Constitucional ha afirmado que tanto las diversas medidas de satisfacción como las garantías de no repetición, son aquellas acciones que van dirigidas, a deshacer el agravio inferido a la víctima, e impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron sus derechos (Sentencia C-979 de 2005), también ha señalado que este tipo de garantías permiten que las organizaciones y/o autores que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y condenados, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos humanos se repitan (Sentencia C-715 de 2012). En relación con la garantía de no repetición consagrada actualmente en los arts. 149 y 150 de la Ley 1448 de 2011, se entiende que está directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH, a través de medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que promuevan la salvaguarda y respeto de los derechos (Sentencia C-839 de 2013).

Particularmente, se han identificado como parte de esta obligación: i) reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; ii) poner en marcha estrategias de prevención integral; iii) implementar programas de educación, divulgación, y denuncia dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción; iv) destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención; v) adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, incluyendo el diseño e implementación de instrumentos de identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de violación; y vi) tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados (Sentencia C-839 de 2013).

CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA

Jurisprudencia de Justicia y Paz

A través del presente capítulo se realiza un recuento jurisprudencial sobre los avances que han tenido las medidas de satisfacción en la jurisprudencia de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín y Barranquilla, no obstante que ya desde el 2005 por medio de la Ley 975 de ese año, y a través de las sentencias de constitucionalidad de dicha Ley emanadas de la C. Constitucional se consagro por primera vez al interior del ordenamiento jurídico nacional, éstas medidas de reparación, las cuales ya habían venido reconociéndose en el derecho internacional de los Derechos Humanos, y que finalmente en lo que concierne a Colombia, es por medio de la Ley 1448 de 2011 que es posible aplicar dichas medidas a todas las víctimas del conflicto armado interno.

Jurisprudencia del Consejo de Estado

Históricamente al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, existen dos periodos en los cuales se puede observar la responsabilidad pública del Estado, el primero hasta 1991 y que se caracterizó por no existir disposiciones legales expresas que consagraren normas en materia de responsabilidad de la administración por los daños a sus ciudadanos, el segundo desde la expedición de la actual Carta Política de 1991 y hasta la

actualidad que establece en el artículo 90⁴¹ de la norma ius-fundamental, la cláusula de imputación de daños antijurídicos al Estado colombiano (Escobar, Benítez y Cárdenas, 2011; Núñez y Zuluaga, 2012).

Frente al primer periodo que data de la vigencia de la Constitución de 1886, se pueden encontrar diversas normas que si bien no tenían consagrado el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado como actualmente se encuentra, si fueron fundamento para que el Consejo de Estado conociera de daños a los asociados. En efecto se puede encontrar el Decreto 528 de 1964, sobre normas de organización judicial y competencia, en cuyo artículo 20 se dispuso: *“La jurisdicción contencioso administrativa está instituida para definir los negocios originados en las decisiones que tome la administración, en las operaciones que ejecute y en los hechos que ocurran con motivo de sus actividades, con excepción de los casos contemplados en los numerales 2° y 3° del artículo 73 de la Ley 167 de 1941”*, no obstante que:

“La ausencia normativa fue el gran problema que tuvo que enfrentar, inicialmente, la jurisdicción ordinaria desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ante demandas de responsabilidad por daños contra el Estado. La solución fue acudir al derecho privado en aplicación del principio de analogía, para fundamentar una inicial responsabilidad indirecta, tesis que se aplicó aproximadamente hasta 1938, y luego el reconocimiento de que el Estado podría incurrir en responsabilidad directa de naturaleza subjetiva, en aplicación de la teoría de la falla del servicio” (Consejo de Estado, 2015, 3).

A partir de la entrada en vigencia del actual texto constitucional, su artículo 93 sobre la implementación en el derecho interno de los mecanismos internacionales de protección en Derechos Humanos y DIH ha cobrado relevancia, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado lo ha tomado como parámetro normativo, para determinar la responsabilidad del Estado colombiano en acción y omisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH al interior del territorio nacional. Por ejemplo, las diversas medidas de

⁴¹ “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.”

reparación contempladas al interior de la jurisprudencia del órgano de cierre de lo

Caso	1
-------------	----------

contencioso, han tenido inspiración en los pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH. así como de otros organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Europea de DD.HH. conforme a lo anterior, se observarán a continuación, los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado en los cuales ha decretado al interior del módulo de reparaciones, medidas de satisfacción, máxime que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la reparación por vía administrativa las contempla. No obstante, lo precedente, se debe hacer la salvedad que, frente a este tipo de modalidad reparatoria, la jurisprudencia contenciosa-administrativa, aun es disiente en reconocer las medidas de satisfacción, por lo cual tanto la academia como la rama judicial están llamadas a realizar un cambio en la interpretación del derecho público y especialmente en el de la responsabilidad del Estado vía judicial.

Autoridad	Tribunal superior de Barranquilla Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha sentencia	111-001-60-002253-2008-83160 13 de julio de 2015
Postulado	Ferney Alberto Argumedo Torres “el tigre, Camilo, Veintiuno (21), Mata tigre o Andrés”
Conductas	Concierto para delinquir, Homicidio y tortura en persona protegida, Desaparición forzada, Secuestro agravado,
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> • El reconocimiento de responsabilidad y perdón público • Aclarar a la sociedad que no es legítimo arrebatarle la vida, ni su libertad, ni su estabilidad social, familiar, económica ni emocional a algún ser humano, por ninguna circunstancia • Aclarar públicamente, que las víctimas de su actuar delincuencia, NO eran miembros o colaboradores de algún grupo armado organizado al margen de la ley <p>Realización de actos de alcance público:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Sala dispone que las disculpas públicas sean realizadas en evento público que deberá llevarse a cabo en la ciudad de Riohacha, por ser esta la capital del departamento de La Guajira, donde se desplegó, en esta causa, el actuar del mal llamado Frente “Contra insurgencia Wayuu”, este evento público deberá ser coordinado por la Alcaldía Municipal <p>La traducción y lectura de la sentencia en la lengua nativa “el Wayunaki”</p>

Caso	2
Autoridad	Tribunal superior de Barranquilla Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de sentencia	11-001-60-002253-2008-83374 21 de octubre de 2014
Postulado	Janci A. Novoa Peñaranda “Tornillo”
Conductas	Concierto para delinquir, Tortura y homicidio en persona protegida, Secuestro simple, Fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, Desplazamiento forzado.
Medidas de satisfacción	<p>1. Reconocimiento de responsabilidad y disculpas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofrecimiento de las disculpas públicas por parte del hoy

	<p>sentenciado a todas las víctimas del delito de desplazamiento forzado y a las víctimas indirectas por los homicidios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El procesado deberá aclarar a toda la sociedad que no es legítimo arrebatarse la vida, ni su libertad, ni su estabilidad social, familiar, económica ni emocional a algún ser humano, por ninguna circunstancia. <p>2. Como medida de Reparación simbólica, se ubique en la plaza o parque de la población de Mingueo en el departamento de la Guajira una placa conmemorativa en honor de la señora Olga Marina Molina de Baquero y de igual manera una en la plaza o parque de la población de las Flores en el departamento de la Guajira una placa conmemorativa en honor de la señora Rosalba Núñez Molina</p> <p>3. Realización de actos de alcance público.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las placas conmemorativas, como las disculpas públicas a presentarse por el sentenciado, sean puestas y realizadas en evento público que deberán llevarse a cabo en los municipios donde ocurrieron los hechos- El evento público deberá ser coordinado por la Alcaldía Municipal correspondiente.
--	--

Caso	3
Autoridad	Tribunal superior de Barranquilla Sala de Justicia y Paz
Radicación	11-001-60-002253-2008-83201
Fecha de sentencia	1 de agosto de 2014
Postulado	Luis Carlos Pestana Coronado “El Cachaco”
Conductas	Concierto para delinquir, Tortura y homicidio en persona protegida, Secuestro simple, Desplazamiento forzado, Hurto calificado.
Medidas de satisfacción	1. El reconocimiento de responsabilidad y perdón público. Para ello, se ordenará el ofrecimiento de las disculpas públicas por parte del hoy sentenciado, dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a todas las víctimas del delito de desplazamiento forzado, a las víctimas indirectas por los homicidios

	<p>Así mismo, el procesado LUIS CARLOS PESTANA CORONADO, deberá aclarar a toda la sociedad que no es legítimo arrebatarse la vida, ni su libertad, ni su estabilidad social, familiar, económica ni emocional a algún ser humano, por ninguna circunstancia.</p> <p>Igualmente, deberá aclarar públicamente, tal como lo hizo en sus versiones libres, que las víctimas de su actuar delincencial, no eran miembros o colaboradores de algún grupo armado organizado al margen de la ley.</p> <p>2. Realización de actos de alcance público.</p> <p>Para la consecución de la medida anterior, la Sala dispone que las disculpas públicas a presentarse por el sentenciado, sean realizadas en evento público que deberán llevarse a cabo en los municipios donde ocurrieron los hechos por los que hoy se dicta sentencia, específicamente en el Municipio de La Jagua de Ibirico, en el corregimiento de Casacará en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, y en el corregimiento de Mandinguilla del Municipio de Chimichagua, todos del departamento del Cesar; estos eventos públicos deberán ser coordinados por las Alcaldías Municipales correspondientes – quien liderará el evento público salvaguardando que se cumpla con los principios de publicidad de las actuaciones administrativas y especialmente dirigidas a la asistencia de las víctimas mediante su notificación por los medios que consideren pertinentes- en coordinación con el INPEC y las entidades encargadas de mantener el Orden Público.</p>
--	---

SALA DE JUSTICIA Y PAZ-TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Caso	1
Autoridad	Tribunal superior de Medellín Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253-2006-82689
Fecha de sentencia	23 de abril de 2015
Postulado	Jorge Eliécer Barranco Galván, alias el Paisa o el Escamoso.

	<p>Iván David Correa, alias el Boca.</p> <p>José Luís Hernández Salazar, alias Poncho, Richard o Ricardo.</p> <p>Dovis Grimaldi Núñez Salazar, alias el Taxista o el Flaco.</p>
Conductas	Concierto para delinquir, tortura, homicidio y lesiones personales.
Medidas de satisfacción	<p><i>i)</i> La realización de una ceremonia de reconocimiento y recordación de las víctimas en los municipios de Montería y Sahagún con la presencia del Gobernador de Córdoba y el alcalde de cada municipio, el Director Seccional de Fiscalías, los comandantes de la XI Brigada y la Policía de Córdoba y las víctimas reconocidas en la Sentencia. Allí tendrá lugar un acto de desagravio por parte de los postulados, quienes deberán hacer pública el reconocimiento de su responsabilidad, manifestar su arrepentimiento por tales actos, solicitar perdón a las víctimas y la sociedad por el daño causado y expresar su sincero compromiso de no volver a cometer esas conductas.</p> <p>El Gobernador de Córdoba, el Alcalde de Montería, el Director Seccional de Fiscalías y los Comandantes de la XI Brigada y la Policía de Córdoba, reconocerán la responsabilidad de sus instituciones por acción y omisión en la promoción, consolidación y/o apoyo y/o expansión de los grupos paramilitares en la región y los hechos cometidos por el Bloque Córdoba al mando de Salvatore Mancuso, solicitarán perdón por esas acciones u omisiones y deberán comprometerse a realizar todas las acciones necesarias para que esos hechos no vuelvan a repetirse, indicando públicamente las acciones y medidas que adoptarán para ese efecto.</p> <p>Los actos serán coordinados por la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de cada municipio y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, garantizando la participación y presencia de éstas y deberá realizarse en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia. El acto deberá incluir a las demás víctimas reconocidas del Bloque Córdoba.</p>

	<p>La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas rendirá informes hasta que la ceremonia tenga lugar y notificará a la Sala la fecha, hora y lugar donde se realizará el evento, asegurando su citación al mismo, así como la convocatoria hecha para difundir esta conmemoración en homenaje a las víctimas.</p> <p><i>ii)</i> La realización de un proceso de reconstrucción de la memoria histórica en el Departamento, afectado por el accionar del Bloque Córdoba, a cargo de la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este proceso, procurará reconstruir históricamente la presencia y penetración en el territorio de este grupo armado y de los otros grupos armados ilegales, así como los procesos de resistencia y resiliencia de las comunidades que se vieron sometidas por su influencia y tendrá en cuenta las orientaciones, dimensiones y constataciones hechas por la Sala en esta sentencia, las diferentes formas de afectación, entre las que se destacan el homicidio sistemático, individual o colectivo, la desaparición y el desplazamiento forzado, como instrumentos que posibilitaron el control territorial y social que este grupo logró ejercer en el sur, centro y norte del Departamento y en su capital como pudo evidenciarse a lo largo de esta sentencia. La labor de difusión estará a cargo de la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería y el Centro Nacional de Memoria Histórica en articulación con los entes municipales y departamentales.</p> <p>El resultado o resultados de este proceso en cualquiera de sus formas (escrito, documental, fotográfico, etc.), deberá ser expuesto y exhibido en centros educativos y Casas de la Cultura del departamento de Córdoba, especialmente de los municipios de Montería y Sahagún, así como en otras regiones del país, con el objetivo de que otros sectores y otras comunidades puedan conocer las experiencias vividas por la población bajo el control paramilitar y de los otros grupos armados.</p>
--	--

	<p><i>iii)</i> A la Gobernación de Córdoba y su Secretaría de Cultura y a la Alcaldía de Sahagún, en coordinación con el Centro de Memoria Histórica, que financie, asesore y acompañe la publicación de las memorias del señor Iván Darío Naranjo Génes, víctima indirecta en el presente proceso sobre sus vivencias y experiencias a raíz del homicidio de su hermano Eliberto Abadis Naranjo Genes en el marco del conflicto armado en esta región. La publicación deberá hacerse en un libro o monografía, según expresó en el Incidente de Reparación Integral.</p> <p>La Sala le sugiere que la publicación lleve por título: “Cuando la violencia toca a tu puerta”.</p> <p>Estas 2 últimas medidas de satisfacción deberán realizarse y cumplirse en un plazo razonable, que en ningún caso podrá superar los 18 meses contados a partir de la ejecución de esta sentencia y las entidades comprometidas deberán informar a la Sala el plan que se adoptará para materializar la medida y la programación de las actividades concretas para la publicación de las memorias.</p> <p><i>iv)</i> Debido a que el postulado Jorge Eliecer Barranco en el desarrollo del Incidente de Reparación Integral realizado el 31 de octubre en el municipio de Sahagún, ofreció publicar en un periódico de circulación regional no sólo el reconocimiento de sus responsabilidades y su solicitud de perdón por el daño causado, sino también la dignificación del nombre de sus víctimas, se le ordenará realizar la respectiva publicación, preferentemente en el Periódico El Meridiano de Córdoba, pero deberá ser presentado previamente a la Sala para su revisión y aprobación y enviar luego un ejemplar del periódico.</p> <p><i>v)</i> Esta sentencia constituye en sí misma una forma de reparación y satisfacción de las víctimas. Con ese fin, la Sala declarará que todas las víctimas de este caso, eran personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades o indefensas y, por lo tanto, se trata de hechos injustos.</p>
--	--

Caso	2
Autoridad	Tribunal superior de Medellín Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de sentencia	0016000253-2007-82700, 0016000253-2008-83269, 0016000253-2007-82699, 0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864, 0016000253-2008-83275 y 0016000253-2008-83285. 24 de septiembre de 2014
Postulado	Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Alias Cañitas o Bertico. Néstor Eduardo Cardona, Alias Alpinito o El Mono. Édgar Alexander Erazo Guzmán, Alias Alex Bonito. Mauro Alexander Mejía Ocampo, Alias El Aguacate. Juan Mauricio Ospina Bolívar, Alias El Rolo. Wander Ley Viasus Torres.
Conductas	Concierto para delinquir; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y la utilización ilegal de uniformes e insignias; homicidio; destrucción y apropiación de bienes; falsedad en documento público y el uso del documento falso entre otros.
Medidas de satisfacción	a) El Estado y las Alcaldías de Medellín e Itagüí son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia y los hechos en los cuales perdieron la vida las víctimas. b) La sentencia constituye una reconstrucción lo más fidedigna posible y lo más próxima a la verdad de los hechos cometidos y el contexto en el que se cometieron y en esa medida, es en sí misma una forma de reparación y satisfacción de las víctimas y la sociedad. c) Declárase que todas las víctimas, salvo el caso del sujeto identificado sólo como el Gato, eran personas civiles que no participaban directamente en las hostilidades y, por lo tanto, se trata de hechos injustos cometidos como parte de una política dirigida a erigirse en el único poder y autoridad real en Medellín y su área metropolitana y mantener y ejercer la hegemonía, dominio y control sobre la población

	<p>a través del terror y distintos métodos ilegales e imponer un orden político y social autoritario y excluyente, a través de la ejecución sistemática y arbitraria de quienes disientían o se oponían a él y de cualquier persona que no se ajustara a las normas y las reglas morales impuestas por el grupo armado.</p> <p>Declárase que, al ser retenido y privado de su libertad, el sujeto identificado como El Gato adquirió el status de persona protegida y su muerte también fue injusta.</p> <p>d) La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Ministerio de Justicia deben publicar en un medio de amplia circulación nacional las conclusiones a las que llegó la Sala en el <i>Capítulo IV, El contexto de los crímenes</i>, numeral 6, En busca del tiempo perdido. La política detrás de los crímenes, párrafos 167 a 181 y en el <i>Capítulo VII, Los hechos atribuidos a los postulados</i>, numeral 8. Las graves omisiones de la Fiscalía, párrafos 341 a 343, de esta sentencia.</p> <p>e) La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y al Concejo Municipal deben adoptar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros y otros desechos en las zonas conocidas y delimitadas como la Escombrera y la Arenera de esta ciudad.</p> <p>f) El Ministro del Interior, al Fiscal General de la Nación, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín y las demás instituciones que hacen parte de la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana deben financiar y realizar todos los esfuerzos posibles, suficientes y razonables que estén al alcance de la ciencia, humanos, técnicos y materiales, para encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en las zonas identificadas y delimitadas como <i>La Escombrera</i> y <i>La Arenera</i> y continúen y lleven hasta su terminación el Proyecto La Escombrera. Sin perjuicio de lo anterior, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de</p>
--	---

	<p>Medellín deberán construir en La Escombrera un memorial para rescatar y honrar la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la comuna 13, que podrá incluir a las víctimas de desaparición forzada de otras comunas o zonas de Medellín, mismas o similares medidas deberán adoptarse, en los sitios conocidos como El Morro, El Cebollal, Buenavista y otros.</p> <p>g) La Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín y las demás instituciones que hacen parte de la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana y del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas deben financiar y realizar todos los esfuerzos para encontrar los cuerpos de las víctimas Alberto Miguel Pérez Reyes, Jorge Mario Monsalve Guarín y Julián Andrés Vergara Agudelo.</p> <p>h) Realizar 3 ceremonias de reconocimiento de responsabilidades y recordación de los hechos de que fueron víctimas.</p> <p>En estas ceremonias tendrá lugar un acto de desagravio por parte de los postulados, el Ministro de Justicia, en nombre del Estado, los Alcaldes de Medellín e Itagüí y el Director y los Comandantes de Policía, reconocerán la responsabilidad de sus instituciones por acción y/o omisión en los hechos cometidos por el Bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, solicitarán perdón por esas acciones y omisiones y deberán comprometerse a desplegar todas las acciones y medidas para que esos hechos no vuelvan a repetirse, en los términos establecidos en la parte motiva de esta sentencia. Las autoridades mencionadas garantizarán que los canales Teleantioquia y Telemedellín difundan y transmitan dichas ceremonias.</p> <p>i) La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí deberán conjuntamente financiar, asesorar y acompañar los proyectos del joven Julián David Guerra Acevedo, en los términos expuestos en</p>
--	---

	<p>la parte motiva de esta sentencia. Así como realizar un acto cultural, en el cual se le rinda homenaje a la memoria del señor José Abigail Caro Bedoya y su banda “Mis Primeros Instrumentos”, en el que participará el postulado Édgar Alexander Erazo Guzmán.</p> <p>j) La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Alcaldía de Medellín, sus Secretarías de Educación y para la Cultura Ciudadana y el Colegio San Juan Bautista de la Salle realizaran una jornada cultural en memoria de los jóvenes Gonzalo Múnera Blandón, Jair Alberto Calle y Nelson de Jesús Arias David, en la cual participará el postulado Wander Ley Viasus Torres, en los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión.</p> <p>k) Los postulados Juan Fernando Chica Aterhotúa, Néstor Eduardo Cardona Cardona, Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar Página 783 y Wander Ley Viasus Torres, elaboraran una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas sujeto de esta sentencia, que será colocada en el memorial que se deberá construir en el sector conocido como La Arenera y La Escombrera de Medellín, o en el Museo Casa de la Memoria, en los términos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.</p> <p>l) Ordenar la exención de servicio militar obligatorio y expedición de la tarjeta militar a los jóvenes que fueron relacionados en el <i>Capítulo VIII, Las medidas de reparación integral</i>.</p>
--	---

Caso	3
Autoridad	Tribunal superior de Medellín Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253 2009 83825
Fecha de sentencia	7 de julio de 2015
Postulado	Bloque Héroes Bloque Héroes de Tolová

	Uber Darío Yáñez Cavadías alias „orejas“ o „veintiuno“
Conductas	<p>Concierto para delinquir, Utilización ilegal de uniformes e insignias, Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas en concurso homogéneo con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal, Tortura.</p> <p>Desplazamiento forzado, Despojo en campo de batalla, en concurso con el delito de Hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, Constreñimiento al sufragante, y Reclutamiento ilícito</p>
Medidas de satisfacción	<p>Un acto público y simbólico en el que participará el postulado Uber Darío Yáñez Cavadías, las víctimas asentadas en el municipio de Apartadó y las que no, lo harán por medio del sistema de videoconferencia, <u>ceremonia en las que se rendirá un sentido homenaje a las víctimas y contará el desmovilizado con la oportunidad de deprecar el perdón de los afectados con sus conductas punibles, y a su vez podrá exteriorizar su compromiso de viva voz, de no repetir los vejámenes y los actos de barbarie en los que participó como miembro de la estructura paramilitar.</u></p> <p>Las Alcaldías y Concejos Municipales de Apartadó-Antioquia, Valencia y Tierralta-Córdoba, deberán si lo consideran viable conmemorar (adicional al 9 de abril día nacional de las víctimas), <u>un día de carácter local en honor a las víctimas del conflicto armado</u> (sugerencia de la Sala es el 21 de febrero), en donde se realizarán actividades para reconocer el padecimiento y dolor que sufrieron las personas; si es del caso se analice la posibilidad de <u>construir placas conmemorativas</u> en las que se incluyan los nombres de las víctimas directas como un mecanismo de reconocimiento de su padecimiento.</p>

Caso	4
Autoridad	Tribunal superior de Medellín Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253 2008 83241

Fecha de sentencia	27 de agosto de 2014
Postulado	<p>Darío Enrique Vélez Trujillo, alias El Tío o Gonzalo</p> <p>Bernardo Jesús Díaz Alegre, alias El Burro</p> <p>Carlos Arturo Furnieles Álvarez apodado el Saiza</p> <p>Juan Pablo López Quintero alias Chimurro</p> <p>Pablo José Montalvo Cuitiva alias David o Alfa 11</p> <p>Dairon Mendoza Caraballo alias Cocacolo, Rogelio, Puma o Águila</p> <p>Efraín Homero Hernández Padilla alias Armero, Leopardo1 u Homero</p> <p>Elkin Jorge Castañeda Naranjo alias Hermógenes Maza o Güevudo</p>
Conductas	<p>Concierto para delinquir, Homicidio en persona protegida, Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal”, Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Utilización ilegal de uniformes e insignias, Desplazamiento forzado, Tortura, Secuestro y Exacción o contribuciones arbitrarias.</p>
Medidas de satisfacción	<p>Las instituciones públicas y privadas mencionadas en la parte resolutive del fallo deberán asumir su compromiso con el apoyo que requieren las víctimas del conflicto interno armado.</p> <p>La creación y ubicación de una placa conmemorativa en la que se incluya el listado de las víctimas que fueron afectadas con ocasión de las incursiones realizadas por el grupo paramilitar, Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU.</p> <p>La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica deberán incluir la sentencia en el archivo del ultimo; igualmente al Archivo General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación preservará y cuidará de la sentencia.</p>

Caso	5
Autoridad	<p>Tribunal superior de Medellín</p> <p>Sala de Justicia y Paz</p>
Radicación	1 1 0 0 16000253200680018

Fecha de la sentencia	2 de febrero de 2015
Postulado	Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”
Conductas	Concierto para delinquir, Tráfico de estupefacientes, Tortura y homicidio en persona protegida, Secuestro, Fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas, Desplazamiento forzado y hurto entre otros.
Medidas de satisfacción	<p>Se EXHORTÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. El Ministerio de la Protección Social y las Secretarías de Salud de Antioquia y Córdoba implementen un programa integral e interdisciplinario que se oriente a brindar apoyo a las mujeres y hombres víctimas de violencias sexuales y de actos de violencia basada en género, así como a sus núcleos familiares e hijos. b. La Gobernación de Antioquia, la Gobernación de Córdoba, la Policía y el Ejército Nacional realicen actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados. c. El Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación de los departamentos de Antioquia y Córdoba elaboren y pongan en marcha programas de pedagogía y visualización pública de la comisión de actos de violencia basada en género, y simultáneamente se orienten al reconocimiento en condiciones de justicia y dignidad, del estatus de víctimas sobrevivientes de quienes resultaron afectados en este proceso con hechos de violencia basada en género. d. El Estado colombiano, el Ejército y la Policía Nacional realicen un acto público de compromiso de cero tolerancia frente a crímenes de violencia basada en género por parte de civiles, miembros de actores armados o de delincuencia común y de los agentes de la fuerza Pública. <p>Se ORDENÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. El postulado RAMIRO VANOY MURILLO, alias “Cuco Vanoy”, se dirija de viva voz a las víctimas del municipio de Peque – Antioquia y del corregimiento El Aro en el municipio de Ituango – Antioquia, ofrezca

	<p>excusas y acepte la responsabilidad por los hechos cometidos, asumiendo el compromiso de que esta clase de hechos jamás se volverán a repetir.</p> <p>b. El postulado RAMIRO VANOY MURILLO, dirija de viva voz a las víctimas de los delitos de violencia basada en género manifestaciones de perdón y reconocimiento en un acto público, como una forma de no olvidar lo que sucedió.</p> <p>c. La construcción en la plaza principal del municipio de Peque y la del corregimiento de El Aro en el Municipio de Ituango, monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación, que rememoren y reivindiquen la memoria y dignidad de las víctimas, acompañado, cada uno de ellos, de una placa de reconocimiento de responsabilidad por los actos bárbaros, la cual será instada por el postulado.</p>
--	---

SALA DE JUSTICIA Y PAZ-TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

Caso	1
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de sentencia	110016000253200782790 29 de junio de 2011
Postulado	ARAMIS MACHADO ORTIZ. “Cabo Machado” ó “Iguano”
Conductas	Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones y Fabricación, Tráfico de Armas y Municiones de Uso Privativo de las Fuerzas Armadas, Concierto para delinquir.
Medidas de satisfacción	No se dieron.

Caso	2
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de sentencia	110016000253-200681366 7 de diciembre de 2011
Postulado	EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES. Alias “Don Antonio”, “Isaac Bolívar”, “Trinito Tolueno”, “William Ramírez Dueñas” y “Tijeras”.

	ANDRÉS MAURICIO TORRES LEÓN. Alias “Z1”, “Zeus”, “Jesucristo” o “Cristo”
Conductas	Homicidio en persona protegida, Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, Hurto calificado, Terrorismo, Contribuciones arbitrarias, Secuestro, Tortura
Medidas de satisfacción	<p>a. Publicación del primer punto resolutivo de la sentencia y de las investigaciones sobre los procesos de origen, consolidación y expansión de las Autodefensas en la Costa Norte colombiana que fueron adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y presentadas durante estos procesos, en un diario de amplia circulación nacional.</p> <p>b. Exhortación a las autoridades competentes de la entrega de las indemnizaciones concedidas en la presente providencia, a que verifiquen qué víctimas han sido reparadas por otras vías como la administrativa, para efectos de administrar en debida forma los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas.</p> <p>c. EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES y ANDRÉS MAURICIO TORRES LEÓN, deberán suscribir un documento en el que se comprometen a no incurrir en nuevas conductas que sean violatorias de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Ordenamiento Penal Colombiano, incluido el compromiso de no reclutar personas menores de edad, el cual deberá ser publicado en un diario de amplia circulación nacional.</p> <p>d. EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES y ANDRÉS MAURICIO TORRES LEÓN, deberán ofrecer disculpas públicas a las víctimas de los delitos por ellos cometidos y la sociedad en general, y ser publicadas en un diario de amplia circulación nacional, y realizadas en un evento público en los municipios donde se realizaron las lamentables violaciones.</p> <p>e. Exhortación a diferentes entes públicos para que adecúen paseos peatonales en los municipios donde ocurrieron los ilícitos, en el que se incluyan placas con los nombres de las víctimas en esta providencia</p>

	<p>reconocidas.</p> <p>f. La Comisión Nacional para la Reparación o en su defecto el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, deberá realizar y publicar un material escrito en el que se consignen las biografías de las víctimas directas en los cargos que fueron legalizados.</p> <p>g. Los funcionarios que resulten responsables por su participación en ilícitos relacionados con los conocidos por esta Sala, eleven petición pública de perdón a la ciudadanía y a las instituciones de las que fueron miembros, la cual deberá ser publicada en un diario de circulación regional, con el fin de dignificar el nombre de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y devolver la confianza en las instituciones.</p>
--	--

Caso	3
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253200682222
Fecha de sentencia	30 de julio de 2012
Postulado	EDISON GIRALDO PANIAGUA “El Pitufu”
Conductas	Concierto para delinquir, Desaparición forzada, Homicidio en persona protegida y otros.
Medidas de satisfacción	El postulado debe ofrecer disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas generadas con cada uno de los hechos, sin disminuir su responsabilidad o esgrimir justificaciones de su conducta. Tales manifestaciones deberán publicarse en un diario de circulación regional (Medellín, Montería y Valencia) y departamental (Antioquia y Córdoba).

Caso	4
Autoridad	Tribunal superior de
Radicación	110016000253200680077
Fecha de sentencia	29 de junio de 2010
Postulado	EDWAR COBOS TÉLLES, alias “Diego Vecino” y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTINEZ, alias “Juancho Dique”
Conductas	Concierto para delinquir, desplazamiento forzado,

	Homicidio agravado, secuestro simple, hurto calificado y agravado, entre otros.
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por ser de especial significación para los habitantes de Mampujan el cementerio y la Iglesia, se ordena su reconstrucción en el lugar y con las especificaciones acordadas con la comunidad. 2. En ceremonia de recordación a las víctimas de los hechos ocurridos, el día 10 de marzo de 2011, con la presencia del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, se hará un acto de reconocimiento público de los abusos cometidos por las autodefensas en las poblaciones de San Cayetano y Mampujan. 3. La realización de un documental de una hora que tenga como guion la presente sentencia, con entrevistas a víctimas y victimarios y que contenga un acto público de perdón por los postulados, y deberá transmitirse en una franja horaria de máxima audiencia, por uno de los canales de mayor cobertura del País. 4. Los postulados ofrecieron como medida de reparación, la construcción de un monumento de recordación por los hechos del 10 y 11 de marzo de 2000 en San Cayetano y Mampuján, tal construcción se hará con la coordinación previa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (quienes deberán consultar con la población de San Cayetano y Mampujan los detalles del monumento, especificaciones, lugar donde debe quedar ubicado y demás) se fabrique, antes de la ceremonia de recordación que tendrá lugar el 10 de marzo de 2011. 5. Comenzar a trabajar sobre el proyecto del Museo de Víctimas. 6. La edificación de los centros educativos que se construyan llevase un nombre conmemorativo de estos hechos.

Caso	5
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253200782701
Fecha de sentencia	16 de diciembre de 2011

Postulado	Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, “Kike”, “Puma 4”, “José Alfredo Berrio” o “Fredy Enrique Rendón Henao”.
Conductas	Concierto para delinquir, reclutamiento ilícito de menores, homicidio agravado, secuestro simple entre otros.
Medidas de satisfacción	<p>a. Exhortar a la Vice presidencia de la República, para continuar la prevención del reclutamiento de menores, en el marco de la celebración del día internacional contra el reclutamiento del niño soldado el 12 de febrero.</p> <p>b. Igualmente, realice un acto público, con cobertura de los canales de televisión estatales, en el que se rechace el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes en grupos armados ilegales; se reconozca que el Estado tiene la responsabilidad de atacar las causas de reclutamiento;</p> <p>c. Se lean apartes de los relatos de los menores escuchados en audiencia, siempre guardando reserva de su identidad. Esto con el fin que la sociedad colombiana conozca la crueldad de este crimen de guerra.</p> <p>d. FREDY RENDON HERRERA tendrá que reconocer su responsabilidad en las conductas violatorias de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como solicitar excusas públicas tanto a los jóvenes como a sus familias y a las comunidades, y deberá abstenerse de presentar explicaciones o justificaciones de estas.</p> <p>e. Los jóvenes que quiera, y consideren que su vida e integridad no corre peligro, deberán, igualmente solicitar perdón por las violaciones a los derechos humanos que perpetraron siendo menores de edad.</p> <p>f. Las víctimas hombres objeto de esta providencia y que no tengan resuelta su situación militar, queden exentas de prestar servicio militar.</p>

Caso	6
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253200880786
Fecha de sentencia	4 de septiembre de 2012

Postulado	GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ. Alias “El Tuerto”, “Antonio”, “Luís” y/o “El Pirata”
Conductas	Homicidio en persona protegida, secuestro simple, desaparición forzada, desplazamiento forzado.
Medidas de satisfacción	<p>a. La publicación del primer punto resolutivo de la sentencia y de las investigaciones sobre los procesos de origen, consolidación y expansión de las Autodefensas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Huila que fueron adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en un diario de amplia circulación nacional.</p> <p>b. Exhortar al Centro de Memoria Histórica para que las publicaciones de que habla los dos primeros puntos resolutivos integren al cuerpo documental del Museo Nacional de la Memoria.</p> <p>c. GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ suscribirá un documento en el que se compromete a no incurrir en nuevas conductas que sean violatorias de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Ordenamiento Penal Colombiano, el cual deberá ser publicado en un diario de amplia circulación nacional.</p> <p>d. GIAN CARLO GUTIÉRREZ SUÁREZ deberá ofrecer disculpas públicas a las víctimas de los delitos por él cometidos y la sociedad en general, y deberán ser publicadas en un diario de amplia circulación nacional.</p> <p>e. Se suspende la obligación de prestar servicio militar de aquellas víctimas acá reconocidas que no hayan definido su situación militar.</p>

Caso	7
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de la sentencia	110016000253200680281 2 de diciembre de 2010
Postulado	JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA. Alias “El Iguano, Raúl, Sebastián, Pedro Fronteras”
Conductas	Homicidio en persona protegida entre otros.
Medidas de satisfacción	<p>1. Con presencia de personalidades del orden Departamental y local, previa convocatoria de víctimas, se reinaugure la cancha “el chulo” y su</p>

	<p>destinación para eventos deportivos con un nombre indicativo de Esperanza y se coloque una placa recordatoria de lo allí sucedido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La realización de un documental de una hora que tenga como guion la presente sentencia, con entrevistas a víctimas y victimarios y que contenga un acto público de perdón por JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA, el cual se transmitirá en una franja horaria de máxima audiencia, por uno de los canales de mayor cobertura del País. 3. En su doble calidad, víctima y victimario, la Fiscalía General de la Nación colocará una placa de recordación en el palacio de justicia de Cúcuta, con el nombre de los fiscales asesinados por las autodefensas, y una leyenda cuyo texto será acordado con los familiares de éstos. 4. A cargo de la Alcaldía de Cúcuta se colocará una placa conmemorativa de los asesinatos de los comerciantes de CENABASTOS, en el sitio acordado con los familiares de estas víctimas y la administración de la Central de Abastos y se realizará un acto público de recordación en la fecha que estipulen.
--	---

Caso	8
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253200680585
Fecha de sentencia	31 de enero de 2012
Postulado	JOSE BARNEY VELOZA GARCÍA. Alias “El flaco o Guerra”
Conductas	Homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, hurto agravado, falsedad material de documento público
Medidas de satisfacción	JOSE BARNEY VELOZA GARCÍA ofrezca disculpas públicas a los familiares del señor XXX sin disminuir su responsabilidad o esgrimir justificaciones por el hecho. Deberá realizarse en el marco de la conmemoración en la que el comandante del Bloque Bananero actúe de la misma manera por las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidos en esta región. Dichas manifestaciones

	deberán publicarse en un diario de circulación regional y departamental.
--	--

Caso	9
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de la sentencia	1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070 1 de diciembre de 2011
Postulado	JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, alias “Lucho” y “El Sargento”. WILMER MORELO CASTRO, alias “Boqui” JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, alias “Platino”.
Conductas	Homicidio en persona protegida, tortura,
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordenar a JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS: la suscripción inmediata de un documento en el que se comprometen a no incurrir en nuevas conductas que sean violatorias de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Ordenamiento Penal Colombiano, el cual deberá ser publicado en un diario de amplia circulación nacional. 2. Ordenar a JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN, WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS, el ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas, deberán ser publicadas en un diario de amplia circulación nacional, y se realicen en un evento público en los municipios de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame, a la que se deberán invitar a los estudiantes de las escuelas de las veredas afectadas, especialmente de la Escuela San José Chaparral, Escuela Cravo Charo y Escuela 12 de Octubre. 3. Se ordena que allí los Postulados hagan entrega de las manualidades elaboradas por ellos para las víctimas, es decir, los 50 bolsos colegiales confeccionados por el postulado JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN para las escuelas de las Veredas El Caracol y Feliciano; y los cuadros en punto de cruz ofrecidos por los postulados WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL

	<p>HERNÁNDEZ CALDERAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Exhortar a la Alcaldía Municipal de Tame, para que construya un sitio dedicado a la memoria, en las veredas de Matal de Flor Amarillo y Corocito, que deberá ser concertado previamente con las comunidades, y deberá contener las placas con los nombres de las víctimas mortales de la “Masacre de corocito” (hecho no. 1 por el que fue condenado JOSÉ RUBÉN PEÑA TOBÓN) y de la Incursión de Matal de Flor Amarillo” (hecho no. 3 por los que fueron condenados WILMER MORELO ASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERAS) y una narración sucinta de los hechos en los que perdieron la vida. 5. Exhortar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y reparación a las Víctimas y al Centro de Memoria Histórica, para que capacite al personal docente de las instituciones educativas del municipio de Arauca, en Derechos Humanos. 6. Ordenar a la Comisión Nacional para la Reparación y la Reparación realizar y publicar un material escrito en el que se documenten los hechos perpetrados en las masacres de Corocito y Matal de Flor Amarillo como casos notorios del accionar del Bloque Vencedores de Arauca, y que consigne las biografías de las víctimas directas. 7. Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación la documentación de los crímenes sexuales como crímenes de guerra y de lesa humanidad, que deberá ser publicada. 8. Ordenar observar y conmemorar: El 24 de marzo de todos los años como el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas; El 26 de junio de todos los años como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura; El 21 de septiembre de todos los años como el Día Internacional de la Paz; El 2 de octubre de todos los años como el Día Internacional de la No Violencia; El 10 de diciembre de todos los años como el Día de los Derechos Humanos.
--	---

Caso	10
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de sentencia	110016000253200680012 30 de agosto de 2013
Postulado	Rodrigo Pérez Álzate. Alias “Julián Bolívar y Pérez”.
Conductas	Concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, contribuciones arbitrarias, apoderamiento de hidrocarburos, reclutamiento ilícito, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, homicidio y tortura en persona protegida, entre otros.
Medidas de satisfacción	El postulado: <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles; tales manifestaciones que serán publicadas en un periódico de circulación nacional. 2. Debe participar en los diferentes actos simbólicos de resarcimiento y resignificación de las víctimas a los que haya lugar de conformidad. 3. Debe prestar colaboración veraz y efectiva que contribuya con la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de las víctimas que tenga conocimiento.

Caso	11
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de la sentencia	11-001-60-00 253-2006 810099 30 de octubre de 2013
Postulado	HÉBERT VELOZA alias “HH”, “Don Hernán”, “Mono Veloza”, “Care Pollo”, “Hernán Hernández”.
Conductas	Concierto para delinquir agravado, Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, de uso privativo de las fuerzas armadas, Utilización ilegal de uniformes e insignias, Reclutamiento ilícito, Desaparición forzada y Homicidio agravado, entre otros.
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suspender a algunos jóvenes de la obligación de prestar el servicio militar. 2. El postulado debe aceptar públicamente los hechos y

	<p>solicitar perdón público de las conductas que involucren graves y manifiestas violaciones de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.</p> <p>3. Los actos de desagravio se realizarán en un municipio de Urabá, donde se encuentre un alto porcentaje de las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración a sus derechos.</p>
--	--

Caso	12
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación Fecha de la sentencia	11-001-60-00 253-2006 80531 6 de diciembre de 2013
Postulado	JOSÉ BALDOMERO LINARES MORENO, alias “Guillermo Torres” JOSÉ DELFÍN VILLALOBOS JIMÉNEZ, alias “Alfa Uno”; RAFAEL SALGADO MERCHÁN, alias “El Águila”; MIGUEL ÁNGEL ACHURY, alias “Miguelito” o “El Crespo.
Conductas	Homicidio en persona protegida, Desaparición forzada, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Violación de habitación ajena, Desplazamiento forzado, Tortura en persona protegida, Secuestro agravado, Detención ilegal y privación del debido proceso, Hurto calificado y agravado, Terrorismo Reclutamiento ilícito, Constreñimiento ilegal, entre otros.
Medidas de satisfacción	<p>1. Eximir de prestar servicio militar a las víctimas que les corresponda.</p> <p>2. Los postulados aceptaran públicamente los hechos y solicitaran perdón público en los que se acepte, así como reconocerán y repudiarán las conductas que involucraron graves y manifiestas violaciones de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.</p> <p>3. Los actos de desagravio se realizarán en los municipios de Puerto López (Meta) y Puerto Gaitán (Meta), donde se encuentran bastantes víctimas afectadas por los</p>

	hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración a sus derechos.
--	--

Caso	13
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253
Fecha de la sentencia	6 de diciembre de 2013
Postulado	ARMANDO MADRIAGA PICON, alias “María Bonita o Wilson”. JESÚS NORALDO BASTO LEÓN, alias “Parabólico o Móvil 15”
Conductas	Homicidio en persona protegida, secuestro simple, tortura en persona protegida, actos de terrorismo, desplazamiento forzado entre otros.
Medidas de satisfacción	<p>a. Disculpas públicas y solicitud de perdón por los postulados a las víctimas directas e indirectas generadas con cada uno de los hechos objeto del proceso, sin disminuir su responsabilidad o esgrimir justificaciones de su conducta. Tales manifestaciones deberán publicarse en un diario de circulación nacional.</p> <p>b. Los postulados participaran en los diferentes actos simbólicos de resarcimiento y resignificación de las víctimas a los que haya lugar de conformidad con los programas que sean ofrecidos por las entidades que participan dentro del Proceso de Justicia y Paz.</p> <p>c. Igualmente, colaboraran de forma veraz y efectiva en la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de las víctimas que tenga conocimiento.</p> <p>d. Asumirán el compromiso de no volver a formar parte de grupos armados organizados al margen de la ley.</p> <p>e. Asistirán a una formación en Derechos Humanos dentro del establecimiento carcelario donde se encuentran privados de la libertad por espacio de cien (100) horas.</p>

Caso	14
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá

	Sala de Justicia y Paz
Radicación	11-001-60-00253-2007 82855
Fecha de la sentencia	29 de mayo de 2014
Postulado	<p>RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO, alias “El Viejo”, “Moncho” o “Munrra”.</p> <p>OLIVERIO ISAZA GÓMEZ, alias “Terror” o “Rubén”.</p> <p>LUÍS EDUARDO ZULUAGA ARCILA, alias “MacGyver”.</p> <p>WALTER OCHOA GUISAO o WALTER IGNACIO LASTRA GARCÍA2, alias “Gurre” o “Mono”.</p> <p>JOHN FREDY GALLO BEDOYA, alias “Pájaro” o “Hernán”.</p>
Conductas	Utilización ilegal de uniformes e insignias, entrenamiento para actividades ilícitas, exacciones o contribuciones arbitrarias, homicidio agravado, homicidio y tortura en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de menores, hurto calificado y agravado, acceso carnal violento en persona protegida, secuestro simple y extorsivo, detención ilegal y privación del debido proceso, desplazamiento forzado.
Medidas de satisfacción	<p>Los postulados deberán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suscribir una comunicación, en la cual hagan reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos. 2. Ofrezcan disculpas por su conducta. 3. Se comprometan a no repetirlas.

Caso	15
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253200680450
Fecha de la sentencia	29 de septiembre de 2014
Postulado	<p>GUILLERMO PÉREZ ALZATE, alias “Pablo Sevillano”;</p> <p>ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ, alias “Palustre”;</p> <p>NALFER GUERRA DÍAZ, alias “Rafa”;</p> <p>JULIO CESAR POSADA ORREGO, alias “Tribilin”;</p> <p>JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA, alias “Sarmiento”;</p> <p>NEIL MARQUEZ CUARTAS, alias “Pateguama”;</p> <p>LUIS CORNELIO RIVAS RIVAS, alias “Panameño”; y</p> <p>JIMMY ANTONIO ZAMBRANO INSUASTY alias</p>

	“JIMMY” o “Lengua de Trapo”
Conductas	homicidio en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, testaferrato, reclutamiento ilícito.
Medidas de satisfacción	<p>a. Los postulados ofrezcan disculpas públicas y pidan perdón a las personas afectadas por las agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin disminuir ni justificar su actuar. Estas manifestaciones de perdón deberán ser publicadas en un diario de circulación Nacional y Regional. El periódico que contenga estas manifestaciones, deberá ser entregado a cada una de las familias víctimas reconocidas en esta sentencia en la fecha de la conmemoración que se hará en Tumaco.</p> <p>b. El acopio de los testimonios de las víctimas que fueron relatados durante la jornada de audiencia realizada en el municipio de TUMACO, para integrarlos al tema de memoria como patrimonio público.</p> <p>c. El patrocinio de la presentación de la obra de teatro "EL OLVIDO ESTÁ LLENO DE MEMORIA" que tiene como actores a las víctimas del conflicto, en un canal televisivo Regional y Nacional, así como en diferentes casas de la Cultura a lo largo y ancho del País.</p> <p>d. Igualmente, los postulados:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) deberán continuar prestando colaboración veraz y efectiva que contribuya a la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de quienes fueron asesinados, en especial lo que corresponde a la ubicación de fosas comunes, ii) asumir el compromiso de no volver a formar parte de grupos armados organizados al margen de la ley y iii) asistir a una formación en Derechos Humanos dentro del establecimiento carcelario donde se encuentran privados de la libertad por espacio de doscientas (200) horas.

Caso	16
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá

	Sala de Justicia y Paz
Radicación	2006- 80014
Fecha de la sentencia	11 de diciembre de 2014
Postulado	Juan Francisco Prada Márquez.
Conductas	Concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, Secuestro simple agravado, Actos de Terrorismo, Desplazamiento forzado, Tortura en persona protegida, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Constreñimiento ilegal, Daño en bien ajeno, desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y Extorsión,
Medidas de satisfacción	La realización de un ceremonia coordinada y socializada con las víctimas por la Unidad Nacional de Reparación Integral a las Víctimas, en la cual el postulado reconozca su responsabilidad y les solicite perdón público por su conducta, haciendo manifiesto su compromiso de no repetición.

Caso	17
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	11001-22-52000-2014-00058-00
Fecha de la sentencia	16 de diciembre de 2014
Postulado	ARNUBIO TRIANA MAHECHA, alias “Botalón”; ADRIANO ARAGÓN TORRES, alias “Trampas”; ÁLVARO SEPÚLVEDA QUINTERO, alias “Cesar” o “Pato”; ANTONIO DE JESÚS SERNA DURANGO, alias “Pablo” o “Periquillo”; DIDIER MOGOLLÓN AGUIRRE, alias “MacGyver”; EULISES LOZANO CORTÉS, alias “Taylor”; FERNEY TULIO CASTRILLÓN MIRA, alias “Ronaldo”; GERARDO ZULUAGA CLAVIJO, alias “Rubén” o “Ponzoña”; GUILLERMO DE JESÚS ACEVEDO MEJÍA, alias “Menemene”; HERIBERTO SOLANO RUBIO, alias “La Mosca”; ISMAEL MAHECHA MAHECHA, alias “Rambo”; JESÚS MEDRANO, alias “Aníbal”; JHON JAIRO PALOMEQUE MOSQUERA, alias “Morcilla”; JORGE ALZATE BETANCOURTH, alias “Abelardo” o “Tontín”; JORGE ENRIQUE ANDRADE SAJONERO, alias “William” o “Coñongo”; JOSÉ ANSELMO MARTINEZ BERNAL, alias “Ramón” o “Fabián”; IGNACIO LEÓN CAMARGO,

	alias “León”; JOSÉ MANUEL PÉREZ TAVERA, alias “Julio”; JOSÉ RAÚL GUZMÁN NAVARRO, alias “Zorba”; JUAN EVANGELISTA CADENA, alias “Germán”; LUIS ORTEGA ESPINOZA, alias “Perolito”; NELSON OLARTE JARAMILLO, alias “Yair”; OMAR EGIDIO CARMONA TAMAYO, alias “Carlos Arenas”; ORLANDO DE JESÚS ARBOLEDA OSPINA, alias “Lucho”; ROSO SANTAMARÍA BENAVIDES, alias “Ovidio”; RUBÉN AVELLANEDA PÉREZ, alias “Alfredo”, y, WILLIAM JAVIER IGLESIAS ABRIL, alias “Raúl” o “Jirafa”.
Conductas	Concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, Secuestro simple agravado, Actos de Terrorismo, Desplazamiento forzado, Tortura en persona protegida, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Constreñimiento ilegal, Daño en bien ajeno, desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y Extorsión, entre otros más.
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de la memoria histórica. 2. El reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social. 3. Sin perjuicio de las medidas de satisfacción que se presenten en otras instancias (Artículo 173).

Caso	18
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110012252000201300069
Fecha de la sentencia	10 de abril de 2015
Postulado	SAÚL RINCÓN CAMELO, alias “Coca Cola”
Conductas	concierto para delinquir y exacciones o contribuciones arbitrarias.
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> a. El postulado SAÚL RINCÓN CAMELO alias “Coca cola” deberá asumir el compromiso de no volver a formar parte de grupos armados organizados al margen de la ley y asistirá a una formación en Derechos Humanos dentro del establecimiento carcelario. b. Una exhortación al ministerio de educación nacional

	<p>para que, en articulación con el ICETEX, así como con la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, fomente a través de líneas de crédito, ya sean reembolsables o condonables, el acceso a la educación superior para las víctimas de este proceso, que, reuniendo los requisitos exigidos, quieran acceder a estudios técnicos, tecnológicos o profesionales,</p> <p>c. Se ordenó a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, que proceda a la inscripción en su base de datos de todos los afectados con el actuar del postulado.</p>
--	---

Caso	19
Autoridad	Tribunal superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
Radicación	110016000253
Fecha de la sentencia	3 de julio de 2015
Postulado	JHON FREDY RUBIO SIERRA alias “Mono Miguel”, OSCAR TABARES PÉREZ alias “Frutiño” o “Iván”, JOSÉ ADALBERT UPEGUI CRUZ alias “Osama”, YONEIDER VALDERRAMA CHACÓN alias “Andrés”, CHOVIS JOSÉ TORAL GARCÉS alias “Montería”, EDGAR GONZÁLEZ MENDÓZA alias “Machete”, GIOVANNY ANDRÉS ARROYABE alias “El Calvo” o “Empanada”, HERNÁN DARÍO PEREA MORENO alias “El Chino” y NORBEY ORTIZ BERMÚDEZ alias “Rosita” o “Urabá”.
Conductas	Homicidio y tortura en persona protegida, homicidio agravado, secuestro simple agravado, desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desaparición forzada, actos de barbarie, violación de habitación ajena, y concierto para delinquir.
Medidas de satisfacción	<p>a) Los integrantes del Bloque Tolima de las AUC - postulados-, deberán participar en los diferentes actos simbólicos de resarcimiento y resignificación de las víctimas a los que haya lugar.</p> <p>b) Deberán prestar colaboración veraz y efectiva que contribuya con la localización de personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de quienes fueron asesinados, y la ayuda para recuperarlos,</p> <p>c) Deberán asumir el compromiso de verificar los demás</p>

	<p>hechos que en el futuro les sean formulados por la Fiscalía General de la Nación, así como a revelar públicamente la verdad completa, en la medida que esa actuación no provoque más daño o amenace a la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudarla o impedir que se produzcan nuevas violaciones.</p> <p>d) Igualmente se ordena la exención del servicio militar para las víctimas directas e indirectas.</p>
--	--

CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	500012331000199904688 01
Fecha de la sentencia	25 de marzo de 2009
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Policía y Ejército Nacional
Conductas	Desaparición forzada
Medidas de satisfacción	Publicación de la sentencia en las unidades militares involucradas.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	05001233100019960023701
Fecha de la sentencia	14 de abril de 2011
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceremonia de ofrecimiento de disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad. 2. Construcción de un monumento con el nombre de las víctimas en desagravio por su muerte.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	52001233100019970878901; 5200123310001998005150;
Fecha de la sentencia	52001233100019980051701 25 de mayo de 2011-unidad procesal
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Conductas	Muerte y lesiones personales a soldados en base militar
Medidas de satisfacción	1. La publicación de la sentencia, en el Diario Oficial y de

	<p>la parte resolutive de la misma en un diario de circulación nacional.</p> <p>2. La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad.</p> <p>3. Proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento psicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra.</p> <p>4. Realización de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se hayan producido en los hechos del 30 de agosto de 1996 en la Base Militar de las Delicias, como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a cabo el ataque.</p> <p>5. Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los militares que para la época de los hechos hubieren participado activa o pasivamente en las decisiones relativas a la base militar de las Delicias.</p>
--	--

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	52001233100019980051601
Fecha de la sentencia	8 de junio de 2011
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Conductas	Muerte a soldado regular en base militar
Medidas de satisfacción	<p>1. La publicación de la sentencia, en el Diario Oficial y de la parte resolutive de la misma en un diario de circulación nacional.</p> <p>2. La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad.</p> <p>3. Proveer a las víctimas y a sus familias de un tratamiento psicológico, que permita su reinserción social y la superación de las huellas de la guerra.</p> <p>4. Realización de un informe especial relativo a las violaciones de derechos humanos que se hayan producido en los hechos del 30 de agosto de 1996 en la Base Militar de las Delicias, como consecuencia de las acciones tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a cabo el ataque.</p> <p>5. Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación</p>

	y a la Fiscalía General de la Nación para se investigue disciplinaria y penalmente los actos u omisiones de los militares que para la época de los hechos hubieren participado activa o pasivamente en las decisiones relativas a la base militar de las Delicias.
--	--

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	20001 23 31 000 1999 00274 01
Fecha de la sentencia	29 de octubre de 2012
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> i) La publicación de los apartes pertinentes del fallo, en un diario de amplia circulación nacional y en uno del departamento del Cesar. ii) la inclusión de un aviso en el que conste que la muerte de víctima Omaira Madariaga Carballo no ocurrió con ocasión de un combate de tropas del Batallón “Guajiros” con la guerrilla del ELN, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada por personal militar. iii) La publicación de la sentencia del C. de Estado en un lugar visible al público de la sede principal del Ejercito, así como su divulgación por medios escritos y magnéticos a todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	19001233100019990021701
Fecha de la sentencia	5 de abril de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> a) Ofrecimiento de disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad del municipio por la muerte de la víctima. b) Fijación de una placa, en lugar visible del municipio de Cajibío en conmemoración de la muerte de Julián Andrés Uni Gironza y en desagravio por la misma.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
------------------	---

Radicado	500012331002199200039200
Fecha de la sentencia	3 de mayo de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Conductas	Desplazamiento forzado
Medidas de satisfacción	Se remitiera copia de la sentencia al despacho de la Alcaldía Municipal de Mapiripán, ya que, omitió ejercer funciones de prevención de desplazamiento forzado, máxime cuando quedó probado que el alcalde electo fue informado por la población acerca de las amenazas dirigidas a ella por parte de grupos paramilitares

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	15001233100020010295101
Fecha de la sentencia	29 de agosto de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Conductas	Minas antipersona
Medidas de satisfacción	<p>a. Publicación de la sentencia en el Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de circulación del departamento de Boyacá.</p> <p>b. El ejército nacional colgaría en su página web la sentencia al menos por un año.</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	05001-23-26-000-1990-05197-01
Fecha de la sentencia	27 de septiembre de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Conductas	Tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<p>a. Elaboración de un documental por el Centro de Memoria Histórica de mínimo 20 minutos de duración,</p> <p>b. Acto solemne de reconocimiento a la madre y hermanos de Luis Fernando por los sufrimientos causados con ocasión de las graves afrentas recibidas de parte de integrantes del Ejército Nacional,</p> <p>c. Construcción de un monumento conmemorativo en el lugar donde fueron hallados los restos de Luis Fernando Lalinde.</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
------------------	---

Radicado	1500123 31000 1995 05276 01
Fecha de la sentencia	27 de septiembre de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<p>a) La redacción por parte del Ejército de una nota en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento de Boyacá en donde se haga alusión a la decisión contenida en el fallo, se rectifique la verdadera identidad del occiso y se aclaren las circunstancias en las que murió,</p> <p>b) Disculpas del comandante del Batallón Muisca dirigida, con identidad de nombre y apellido, a todos los actores del proceso,</p> <p>c) Divulgar la decisión judicial por medios magnéticos a todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional, y</p> <p>d) Notificar al alcalde del municipio de Pauna y al gobernador de Boyacá del fallo, para que futuras referencias conozcan sus deberes como autoridades gubernamentales a nivel descentralizado.</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	0500123-31-000-1998-02368-01
Fecha de la sentencia	21 de noviembre de 2013
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Conductas	Desaparición forzada
Medidas de satisfacción	<p>i) La investigación de los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables,</p> <p>ii) Desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas,</p> <p>iii) La elaboración de una placa conmemorativa en la plaza central de San Roque y,</p> <p>iv) El envío de la sentencia al Centro de Memoria Histórica.</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	250002326000199802419 01
Fecha de la sentencia	12 de marzo de 2014

Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Conductas	Desaparición, tortura y ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	Publicación de la sentencia en la página web de la Policía Nacional y en diversos diarios de amplia circulación del orden nacional y territorial.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	70001-23-31-000-1998-00808-01
Fecha de la sentencia	9 de julio de 2014
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Policía y Armada Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial y destrucción material de casas
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> i) Realización de una ceremonia conmemorativa en el corregimiento de Pichilín, en la que se ofrezcan disculpas públicas, ii) Instalación de una placa a cargo de la Policía y la Armada Nacional, en la plaza central del corregimiento de Pichilín, para que hechos como esos no se repitan jamás, en ella se inscribirán los nombres de los cinco fallecidos y sus respectivas fechas de nacimiento, iii) la Unidad para la Atención y Reparación Integral se encargará de incluir a los demandantes y a la comunidad del corregimiento de Pichilín, iv) La Unidad de Restitución de Tierras deberá estudiar la titulación de los predios que componen el corregimiento de Pichilín, y determinará si en el mismo existe alguna anomalía relacionada v) El Centro de Memoria Histórica preservará la sentencia para que haga parte y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación y la memoria colectiva de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	68001-23-31-000-2002-01343-01
Fecha de la sentencia	28 de enero de 2015
Demandado	Nación-Fiscalía General de la Nación
Conductas	Privación ilícita de la libertad
Medidas de satisfacción	a) La realización de un acto de presentación de excusas

	<p>públicas a la víctima, y</p> <p>b) La publicación y difusión de la sentencia en la página web de la entidad condenada.</p>
--	--

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	08001-23-31-000-2001-00993-01
Fecha de la sentencia	5 de marzo de 2015
Demandado	Nación- Ministerio del Interior y de Justicia-DAS
Conductas	Homicidio
Medidas de satisfacción	<p>i) La realización de un acto de presentación de excusas públicas a ANTHOC y a la CUT,</p> <p>ii) La realización de un acto de presentación de excusas las demandantes en una ceremonia privada a los familiares de la víctima, y</p> <p>iii) La publicación y difusión de la sentencia en la página web de las entidades condenadas.</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	54001-23-31-000-1995-09280-01
Fecha de la sentencia	15 de abril de 2015
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Conductas	Ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<p>i) La publicación y difusión de reconocimiento de responsabilidad administrativa en la muerte y desaparición de los hermanos campesinos en mención a través de medios de comunicación nacional (radio, prensa, televisión, etc.), y</p> <p>ii) La publicación y difusión de la sentencia en medios electrónicos de la entidad condenada (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional).</p>

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	63001-23-31-000-2005-00323-01
Fecha de la sentencia	25 de junio de 2015
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Conductas	Privación ilícita de la libertad
Medidas de satisfacción	La Fiscalía General de la Nación debía publicar en un periódico de amplia circulación local en el departamento

	del Quindío los apartes pertinentes de las sentencias penales absolutorias proferidas y resalte la inocencia de Humberto Turriago López respecto de los delitos de rebelión y homicidio que le fueron inculcados.
--	---

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	73001-23-31-000-2001-00403-01
Fecha de la sentencia	29 de julio de 2015
Demandado	Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Conductas	Homicidio y omisión de ayuda
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> i) Publicación y difusión de la sentencia en todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web medios electrónicos del M. de Defensa y la Policía Nacional, por un período ininterrumpido de un año, y ii) El reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del señor ministro de la Defensa y del comandante del Departamento de Policía de Tolima en persona, en la petición de disculpas y exaltación de la memoria de la víctima.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	20001-23-31-000-2000-01017-01
Fecha de la sentencia	30 de julio de 2015
Demandado	Nación-Ministerio de Salud-ISS
Conductas	Homicidio-negligencia de centro de salud
Medidas de satisfacción	<ul style="list-style-type: none"> i) Hacer un acto de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima, y ii) Publicación y difusión de la sentencia en medios electrónicos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	25000-23-26-000-2000-00719-01
Fecha de la sentencia	30 de septiembre de 2015
Demandado	ISS- Hospital Universitario San Ignacio
Conductas	Homicidio-negligencia de centro de salud

Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1) Los representantes legales de las entidades demandadas debían presentar separadamente y por escrito unas disculpas expresas y detalladas acerca de las fallas y faltas que se cometieron durante la prestación del servicio médico dispensado a la madre gestante, y 2) Una exhortación al Ministerio de Salud para que adopte medidas conducentes a reforzar el respeto a la dignidad de la mujer en el marco de la atención gineco-obstétrica, así como al respeto de su integridad física y a la consolidación de la conciencia de que la mujer es sujeto de especial protección.
--------------------------------	--

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	07001-23-31-000-2004-00162-01
Fecha de la sentencia	29 de octubre de 2015
Demandado	Nación - Ministerio de Defensa - Ejército nacional, Policía nacional, Ministerio del interior, Fiscalía General de la Nación y departamento de Arauca.
Conductas	Tortura y ejecución extrajudicial
Medidas de satisfacción	<ol style="list-style-type: none"> 1) El reconocimiento público de los hechos objeto de la condena a través de diario de amplia circulación nacional y en emisora de amplia difusión, 2) La publicación de avisos en un diario de amplia circulación nacional, en uno de circulación en el departamento de Arauca y en una emisora de amplia difusión en el departamento de Arauca, en los que reconociera que el asesinato del señor Efraín Alberto Varela Noriega fue facilitado por miembros de la Brigada XVIII del Ejército Nacional y que estuvo relacionado con las denuncias por él publicadas relativas a las relaciones entre algunos militares y las Autodefensas, y 3) La publicación y difusión de la sentencia en la página web del Ministerio de Defensa Nacional por un mes, con una exhortación a los integrantes de las fuerzas militares a impedir que se repitan actos de connivencia o tolerancia con el accionar de grupos armados ilegales.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
------------------	---

Radicado	41001-23-31-000-2005-01497-01
Fecha de la sentencia	2 de febrero de 2016
Demandado	Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica
Conductas	Secuestro
Medidas de satisfacción	Publicación y difusión de la sentencia en medios electrónicos de las páginas web, documentales y redes sociales de los Ministerios del Interior y Justicia, de Defensa y de la Unidad Nacional de Protección, por un período de 1 año.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	73001-23-31-000-2010-00286-01
Fecha de la sentencia	26 de mayo de 2016
Demandado	Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación
Conductas	Privación injusta de la libertad
Medidas de satisfacción	Publicación de la providencia en un link destacado de la página web institucional de la Fiscalía General de la Nación, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

Autoridad	Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera
Radicado	63001-23-31-000-2009-00025-01
Fecha de la sentencia	26 de mayo de 2016
Demandado	Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Conductas	Privación injusta de la libertad
Medidas de satisfacción	Publicación de la providencia en un link destacado de la página web institucional de la Fiscalía General de la Nación, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

Observaciones generales:

De la información recopilada anteriormente de la jurisprudencia de Justicia y Paz y del Consejo de Estado en su Sección Tercera, se logran evidenciar las siguientes características:

En relación con Justicia y Paz se observa:

1. En primer lugar, no se comprende por qué sin importar quién haya sido el magistrado ponente, en varias sentencias se observa iguales referencias al contexto histórico del conflicto armado, no obstante, desconocer el lugar geográfico y las condiciones específicas de vulneración de los Derechos Humanos de las víctimas, que, siendo especialmente distintas en cada caso, al igual que el sufrimiento y la obtención de justicia, no se tornan de igual modo en la parte resolutive de la providencia, especialmente en las medidas de reparación.
2. En relación con el reconocimiento de las medidas de satisfacción se evidenció que, las mayoritariamente otorgadas por los tres Tribunales son: i) exoneración de prestar el servicio militar a las víctimas y a los familiares de ellas reconocidos debidamente al interior del proceso, ii) disculpas públicas de parte de cada uno de los postulados respectivamente y, iii) la elaboración de placas conmemorativas y monumentos en los lugares o áreas cercanas donde acaecieron los hechos.
3. No obstante, se destacan las siguientes medidas de satisfacción que por su singularidad en la sentencias merecen especial reconocimiento: i) la traducción y lectura de la sentencia en la lengua nativa “el Wayunaki” (sentencia Ferney Alberto Argumedo Torres de 13 de julio de 2015), ii) la grabación de discos y creación de escuelas de música (sentencia de Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga de 24 de septiembre de 2015), iii) el cambio de nombre de un cancha deportiva a través de un acto público, con presencia de personalidades del Orden Departamental y local (sentencia Jorge Iván Laverde Zapata de 2 de diciembre de 2010), y el patrocinio de la presentación de la obra de teatro “El olvido está lleno de memoria” (caso de Guillermo Pérez Álzate y otros, sentencia de 29 de septiembre de 2014).

De su lado, en las sentencias del Consejo de Estado se encuentran:

1. A través de la acción de reparación directa del extinto Código Contencioso Administrativo se han conocido diversos casos a través de los cuales el máximo Tribunal de lo Contencioso ha sentenciado la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, por acción u omisión en la violación a los Derechos Humanos.
2. Se ha determinado dentro de la reparación de daños inmateriales, la obtención de medidas de satisfacción como expresión de lo que la Sección Tercera ha denominado *medidas simbólicas de reparación integral*.
3. Dell análisis realizado a la jurisprudencia se puede concluir que existen dos periodos en los cuales han variado las reparaciones decretadas por el Consejo de Estado, el primero que es anterior al 2009, donde se contempla como forma de reparación idónea la indemnización y en no pocos casos el reconocimiento de responsabilidad del Estado a través de un medio de comunicación de connotación nacional, por ejemplo, de carácter impreso. El segundo que es a partir de 2010 y hasta la fecha, se caracteriza por el reconocimiento de diversas formas de reparación además de las pecuniarias a los daños materiales e inmateriales, y en relación con los últimos entiende la necesidad de aplicar las denominadas medidas simbólicas, que, aunque son de creación jurisprudencial de la Corte Interamericana, su reconocimiento interno más reciente ha sido con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Escobar, Benítez y Cárdenas, 2011; Núñez y Zuluaga, 2012).
4. En relación con las medidas de reparación otorgadas por el Consejo de Estado se encontró que, en su totalidad el máximo tribunal decretó el pago de indemnizaciones por los perjuicios materiales e inmateriales en sus diversas modalidades irrogados a las víctimas. Ya específicamente en el reconocimiento de las medidas de satisfacción, se observa como el Consejo de Estado en algunas de sus providencias asocia este tipo de reparaciones con las denominadas garantías de no repetición, que, si bien hacen parte de las medidas simbólicas, por lo menos, en la jurisprudencia interamericana y en las Leyes 975 y 1448 son diferentes entre sí. En consecuencia, dicha situación si bien no es más que una formalidad, desde la óptica garantista de los Derechos Humanos se debería seguir lo pautado de manera

previa por la Corte Interamericana, así como por las mencionadas leyes en aras a una mayor claridad y comprensión para las víctimas, para los funcionarios estatales y en general para la población colombiana.

5. Al interior de las medidas de satisfacción decretadas por el Consejo de Estado se evidenció que las mayoritariamente ordenadas fueron: i) la publicación de la providencia en las páginas web de las entidades demandadas y en un diario de amplia circulación nacional y/o local, y ii) la presentación de excusas públicas y en algunos casos de forma privada por los hechos y las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas.
6. Es menester afirmar que existen los siguientes casos especiales de reconocimiento de reparaciones, la *“masacre de Pichílin”* en donde además de las anteriores medidas, el Consejo de Estado determinó de manera especial y aislada de las demás providencias que fueron consultadas: i) la instalación de una placa conmemorativa en la plaza central del corregimiento de Pichílin, ii) la exhortación para que las unidades nacionales de reparación integral y de restitución de tierras incluyeran a las víctimas en los procesos administrativos respectivos y, iii) la preservación por parte del Centro de Memoria Histórica de la sentencia como una manera de fortalecer el patrimonio histórico y documental de Colombia, así como constituirse en una herramienta para la construcción de la memoria colectiva de la violencia interna.
7. Por su parte, en el caso *“ejecución extrajudicial Madariaga Carballo”*, se consideró meritorio que la entidad demandada reconociera en un aviso público que la muerte de la víctima no ocurrió con ocasión de un combate de tropas del Batallón con el ELN, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada por personal militar adscrito a dicho batallón (similar medida de reparación se observa en el caso *“ejecución extrajudicial Martínez Vargas”*). En el caso *“ejecución extrajudicial Lalinde Lalinde”* el Consejo de Estado ordenó la construcción de un monumento y la elaboración de un documental por el Centro de Memoria Histórica (igualmente pueden verse el caso *“desaparición forzada en San Roque”* del 21 de noviembre de 2013).

CONCLUSIONES

Como se denoto en el desarrollo del presente trabajo de investigación, las medidas de satisfacción al interior de los medios de reparación por violaciones a los Derechos Humanos son de creación reciente en Colombia, no obstante, su consagración ya es reconocida al interior del continente y desde una óptica comparada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. HH., como se explica en el capítulo 2. Igualmente es menester decir que, si bien el desarrollo de la Corte es exitoso y de sin igual importancia, el establecimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado en diversos proyectos académicos e institucionales, ha dado a entender el difícil proceso que ha implicado el desarrollo de los compromisos internacionales de los Estados, adquiridos al interior del seno de la Organización de las Naciones Unidas y expresados en diversos instrumentos de protección, verbigracia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y demás instrumentos regionales e internacionales de protección.

Es después a través de varias resoluciones del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o por medio de pronunciamientos de la Asamblea General de la OEA, que se comenzaría a dar un reconocimiento más asentado al interior de los ordenamientos jurídicos, acerca de las diversas medidas de reparación y al interior de ellas las de satisfacción, desarrollo que sin lugar a duda debe su éxito a la *dinámica* jurisprudencial como lo denota los pronunciamientos contenciosos del tribunal interamericano.

Por otra parte, haciendo énfasis en el desarrollo de las garantías de satisfacción dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se puede afirmar que, el reconocimiento que les hizo el legislador a través de la expedición de las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 junto a su normatividad reglamentaria, si bien constituyen un avance en la consecución de los fines constitucionales del Estado Social de Derecho consagrado en el art. 1 de la Carta Política,

en concordancia con el art. 93 de la misma, que referencia los compromisos internacionales del Estado colombiano en la protección de los Derechos Humanos y garantías fundamentales al interior del D.I.H., es aún insuficiente para establecer un verdadero sentido de justicia para las víctimas del conflicto armado y en el contexto de una violencia organizada e institucionalizada, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción especial de Justicia y Paz, en donde se evidenció que en una gran parte de los casos sentenciados a través de dicha especialidad, no tenían en cuenta el contexto de violencia y dejación estatal en el cual se perpetraron las violaciones, así como el descompromiso o falla de la administración pública en la perpetración de los crímenes, aunque al comienzo de la sentencia y después de la identificación plena de los postulados se hiciera una reminiscencia de las condiciones que acompañaron los actos reprochables de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública.

Como se evidenció anteriormente y durante el desarrollo de la investigación, ésta comenzó bajo la premisa que, al interior del derecho colombiano, existen diferencias entre los estándares internacionales del derecho a la reparación (ONU, Sistema Interamericano de DD.HH.) y los instrumentos nacionales de igual naturaleza como son la legislación (leyes y decretos) y la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como la emanada de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales de Bogotá, Barranquilla y Medellín. Igualmente se afirmó que, al interior de dichos instrumentos y desde una perspectiva comparativa se avizoraba entre ellos un *desorden* en la manera como reconocían al interior de los procesos de reparación judicial y administrativa, las diferentes medidas de reparación, específicamente las medidas simbólicas de satisfacción.

Conforme a lo anteriormente expresado se analizó si las diferentes medidas de satisfacción reconocidas en las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 junto a sus decretos reglamentarios, así como la jurisprudencia de Justicia y Paz y del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, cumplían con los postulados básicos de dicha normatividad, así como con los estándares regionales trabajados por la Corte Interamericana, siendo el primero, más importante y fundamente de los demás: la dignificación de las víctimas. De esta manera, la comparación hecha trajo como resultados, encontrar, complejidad y ambición en el contenido de las leyes mencionadas *in supra*, especialmente en sus objetivos, afirmación

que también encuentra relación en lo desarrollado por la jurisdicción de Justicia y Paz en lo tendiente al reconocimiento de las reparaciones cuya virtud de *integral*, y *transformadora*, conlleva a que los objetivos sean difíciles de lograr, en concreto:

“La insistencia reciente de caracterizar a la reparación como “transformando vidas”, cuando ciertamente no tiene capacidad para ello, puede producir más frustración que beneficios. Dadas las dimensiones del conflicto, el elevado número de víctimas y la complejidad de programas y factores, todos descritos con ambiciosos adjetivos, hacen la tarea muy difícil de cumplir, al menos con los elevados estándares definidos.” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, 1).

Dicha afirmación elaborada a partir de un estudio de casos en diversas áreas del territorio nacional, donde se han presentado mayores niveles de reclamación de las reparaciones contempladas en la Ley 1448, aplica de igual modo para lo encontrado al interior de Justicia y Paz (Ley 975 y jurisprudencia de las Salas) y en el Consejo de Estado a través de los recursos de apelación en procesos de reparación directa, en lo relacionado en el tiempo que se demoran al interior del contencioso en declarar la responsabilidad del Estado y consecuentemente su deber de reparar, siendo dicha dilación una *Re victimización* para los accionantes, quienes muchas veces ven una baja apropiación de la política de reparación y una débil institucionalidad estatal.

También se puede denotar cómo no es completamente cierto que el solo de hecho de decretar las diversas medidas de satisfacción, presente oportunidad a las víctimas de encontrar sus anhelos de verdad, justicia y reparación, máxime si en ellas la expedición de la Leyes de Justicia y Paz y de Víctimas produjo un nivel alto de expectativas en una rápida respuesta a sus necesidades, en otras palabras: “*a mayor expectativa, mayor nivel de frustración*” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, 3), frase que puede verse expresada, en la implementación de la reparación individual y colectiva que pese a sus avances en materia de indemnizaciones y consecución de algunas medidas de satisfacción y garantías de no repetición, no se ajusta a la concepción de integralidad que el Sistema Interamericano y la misma normatividad interna establece, en efecto:

“la reparación no consiste en una mera distribución de bienes y servicios materiales y simbólicos, sino que debe ser entendida como una política que pretende expresar el

reconocimiento de la dignidad y membrecía de las víctimas a la comunidad nacional y local en tanto plenos ciudadanos de derecho.” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, 15).

Afirma el estudio citado con anterioridad, la manera en que las víctimas han sido desagraviadas en otros escenarios de la vida nacional, como en el reconocimiento de responsabilidad del Estado por violación a los DD.HH., al no observar que la rama ejecutiva se haya “expresado de manera explícita, solemne y por hechos concretos [, y ofrecido] disculpas oficiales a las víctimas” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, 53). De esta manera, se evidencia que, no obstante ser las leyes referenciadas, así como la jurisprudencia analizada medios para lograr los fines superiores que el Derecho Internacional de los DD.HH. otorga a los mecanismos de reparación, aún es insuficiente la manera en que se han materializado dichos postulados a través de las vías administrativa y judicial en el derecho interno, de esta manera, se puede decir que, en la actualidad sigue existiendo un incumplimiento parcial por parte del Estado colombiano en la consecución de sus compromisos internacionales (art. 93 de la Carta Política), a su vez que dicho comportamiento no encuentra asidero en los postulados constitucionales de 1991, especialmente los emanados de los arts. 1, 4 y 90 superiores en otros, lo cual presenta que siga existiendo una violación a la dignidad de las víctimas por cuanto, sus derechos e intereses en ser resarcidos, reparados y respetados aún se encuentra en espera de ser atendidos.

También se observa que si bien con la puesta en marcha de la Ley de Víctimas se ha venido manifestando, al interior de la población nacional una mayor confianza en las instituciones del Estado colombiano -verbigracia asistir a las audiencias, hacerse partícipes en las mesas y comités regionales de víctimas entre otras instancias- aún existe rezagos propios del conflicto armado y la llamada “tramitología” en la consecución de justicia, que no hacen tan exitoso lo pregonado por el texto de la Ley. Así, por ejemplo, tanto en el área interamericana como en el nivel interno existen críticas de la academia y de las mismas víctimas en la forma como son llevados a cabo los medios de reparación contentivos en la Convención y en la legislación nacional.

De la lectura de la jurisprudencia consultada se denota que en la mayoría de los casos la determinación del nivel de reparaciones en la modalidad de satisfacción depende del magistrado ponente, así como del tipo de vulneración, y la participación activa u omisiva de funcionarios del Estado en la violación a los DD.HH. Igualmente se encuentra que existe un “habito” al interior de Justicia y Paz así como del Contencioso-Administrativo por decretar de forma mayoritaria *ciertas* medidas de satisfacción en relación con otras, lo que por ejemplo, hace que en todas las sentencias sea común las disculpas públicas, la publicación de dicho acto en un periódico nacional y el compromiso verbal por parte del procesado de no repetir los hechos delictivos y violatorios de DD.HH.

Por otra parte, las llamadas medidas asistenciales o de repercusión económica pero igualmente de satisfacción son mínimas, de hecho, son más observables en sentencias de 2014 y 2015 que, en los años precedentes, no obstante que, dichas formas reparatorias conforme a la práctica de la jurisprudencia interamericana puedan ser reconocidas bajo otra modalidad. Desde un punto de vista semántico se observa que gran parte del acervo jurisprudencial consultado en materia de medidas de satisfacción contempla en el decreto de este tipo de reparaciones el verbo “Exhortar” al Estado colombiano cuando se trata de una modalidad general, más, en poco casos existe el “ordenar” que desde un punto de vista personal y conforme a lo que ha decantado de tiempo atrás al interior de la defensa de los DD.HH. el cambio de dichos verbos puede alterar la verdad y la consecución de justicia para las víctimas y la aplicación efectiva de los instrumentos legales con que cuentan.

Del mismo modo, se puede concluir que la determinación judicial dentro del proceso de justicia y paz y de lo contencioso-administrativo de decretar algunas medidas de satisfacción como las observadas en el capítulo 3 -haciendo énfasis en la necesidad de que dicho reconocimiento sea consonante con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de DD.HH.- constituye una novedad en el proceso de establecimiento de responsabilidad penal individual y administrativa al interior del derecho colombiano, que debe ser más activo en la participación de las víctimas y no tanto en el “precedente de medidas de satisfacción” de casos análogos o similares, ya que valga decir, cada violación de Derechos Humanos comporta aristas y circunstancias completamente distintas para las víctimas.

En primer lugar, se debe decir que la mayoría de la documentación consultada a lo largo de la elaboración de la tesis de Maestría no desarrolla con plenitud ni a profundidad las medidas de satisfacción, sino más bien reiteran la posición de la mayoría de la doctrina de trabajar acerca de las medidas de reparación. No obstante, lo anterior, se han encontrado trabajos de maestría en universidades colombianas en áreas como el derecho y la ciencia política, que dan cuenta de la necesidad que a nivel judicial y administrativo el Estado colombiano realice unas reformas a la manera en que se están decretando y aplicando las medidas de reparación, y específicamente las de satisfacción⁴².

Partiendo de lo general se encuentran tres elementos claves a tener en cuenta para el análisis de la jurisprudencia consultada, en primer lugar lo que el profesor García Arboleda (2013) comenta al interior de la noción de reparación, sobre la necesidad de esclarecer un concepto demasiado importante como es el de la “esfera pública del duelo” que en el caso colombiano y para el citado autor se expresa a través de los diversos agentes sociales que por los medios de comunicación masivos, alternativos y estatales, realizan manifestaciones públicas de opinión acerca de una violación a los derechos humanos al interior del territorio nacional. En segundo lugar, lo expresado por Orjuela (2015) sobre los dos vértices que tienen las medidas de reparación, la primera de naturaleza jurídica y la segunda desde una identidad transformadora. Frente a la primera afirma que “debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con mayor probabilidad, hubiese existido si el acto no se hubiere cometido. En este enfoque jurídico la reparación es proporcional al daño sufrido.” (45), ya desde una orientación transformadora, la reparación consiste en ser una herramienta a través de la cual, se busquen superar las

⁴² Ver entre otras: Vásquez Quintero, D.P. (2014). *“Acompañamiento psicosocial: un cambio en la concepción de reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia bajo el marco del decreto 4800 de 2011.”*. Bogotá: Tesis de maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana; Rincón Mora, L.M. (2015). *“Evaluación del componente de asistencia de la política pública de atención y reparación a víctimas sobre la población desplazada residente en Cauca (Antioquia)”*. Bogotá: Tesis de maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana; Rivera Rodríguez, G.M. (2014). *“Avances jurisprudenciales y legislativos del derecho a la reparación a pueblos indígenas como víctimas de violaciones de derechos humanos”*. Bogotá. Tesis de Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; Muñoz Murillo, E.A. (2013). *“El derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno: Reparación excepcional en el marco de la Justicia Transicional”*. Bogotá. Tesis de Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; Urueta León, K. (2014). *“La reparación de las víctimas del conflicto armado interno: una defensa del principio de complementariedad entre las vías administrativa y judicial”*. Bogotá: Tesis de Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia.

carencias estructurales de la sociedad proyectando hacía el futuro una renovación de esta (Orjuela, 2015, 49).

En referencia a la aplicación de las medidas de satisfacción, por ejemplo, las relacionadas con la implementación de eximir del servicio militar a quienes han sido víctimas directas o indirectas del personal castrense, aun se presencia carencia de articulación entre las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa y el Ejército en lograr acortas los tiempos y el conocimiento de las providencias judiciales que lo ordenan. Igualmente se afirma que aún existe debilidad del Estado colombiano en asumir a plenitud su responsabilidad –la más de las de las veces omisiva– y al interior de esta castigar a los perpetradores de las violaciones a DD.HH. (Orjuela, 2015, 24-25).

Para describir de mejor manera lo anteriormente dicho, se encuentran algunos indicadores acerca del goce efectivo de derechos de poblaciones vulnerables, el cual arroja un alto índice de víctimas (46,0%) que consideran que ninguna medida de satisfacción puede brindar bienestar y alivio a su dolor, mientras que, sólo un 27.3% encuentran en la investigación y juzgamiento de los victimarios un avance en su reparación. Frente a otras medidas como la reconstrucción del tejido social (10.3%), los actos de reconocimiento y perdón (7,1%), la exención del servicio militar (3,2%), la búsqueda de personas desaparecidas (2,9%) y los actos simbólicos (1,8%) la verdad prevalece como la más importante medida de satisfacción (Orjuela, 2015, 74).

Teniendo en cuenta lo expresado por la doctrina especializada, se recomienda que, en materia de medidas de satisfacción, las instituciones involucradas desarrollen ejercicios pedagógicos y de socialización que den cuenta la importancia de este tipo de medidas para las víctimas y la sociedad en su conjunto, a través de instancias como mesas municipales o regionales de participación (Orjuela, 2015, 95). Por otra parte, se considera que la aplicación de las medidas de satisfacción debe evidenciar el compromiso del Estado y de la sociedad en general por promover la verdad, la recuperación de la dignidad, el alivio al sufrimiento de las víctimas y un camino hacia una verdadera reparación a quienes les han conculcado sus garantías fundamentales (Arévalo, 2012). También debe colocarse de presente que la forma en que se han decretado judicialmente y legislado genéricamente las medidas de reparación, entre ellas las medidas de satisfacción tanto en vía administrativa

como al interior de un proceso contencioso, es necesario que constituyan un avance en la consecución de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, ya que debe tener en cuenta que:

“En primer lugar, el régimen es vago, difuso, impreciso y queda sujeto a la discrecionalidad de los jueces. Este error se deriva de falta de definición conceptual. En segundo lugar, el régimen no parece cumplir su fin de garantizar la solidaridad que fundamental la protección de los derechos de las víctimas, sino que se trata de una cobertura parcial y aleatoria a un número de víctimas. El régimen cubre sólo un número limitado de víctimas, bajo unas condiciones demasiado exigentes para satisfacer sus demandas de justicia. Parece ser que las víctimas más vulnerables, quedan excluidas de reparación.” (140).

Problemáticas que ya colocaba en evidencia la ONU al afirmar en la Resolución 60/147 de 2005 lo siguiente:

“Satisfacción. Reparación que puede contener tanto dimensiones meramente semánticas y/o emocionales, como materiales; incluye múltiples actividades y actitudes cuyos propósitos amplios pueden verse como el cierre o alivio de las heridas/traumas no reparables o compensables, la facilitación del perdón —un factor central y aún de definición ambigua para buscar la reconciliación nacional—, la preservación colectiva de la memoria de lo ocurrido y la dignificación de las víctimas.”

Del mismo modo, se encuentra que no existen mecanismos al interior de los procesos en Justicia y Paz o en la vía administrativos que en la instancia de Reparación Integral contemple una activa participación de las víctimas en la determinación de las medidas de satisfacción, ya que si bien la aplicación de estas si cuentan con la voz y voto de ellas, al interior del proceso jurisdiccional y de la lectura de la leyes 975 y 1448 y, su jurisprudencia constitucional interpretativa se denota una carencia de vías o herramientas para quienes han sufrido agravios en sus garantías fundamentales, en que puedan ser escuchados, ya que no en pocos casos — y sin tener conocimiento concreto de causa- pueden presentarse situaciones donde a las víctimas no les sea de su agrado la aplicación de determinadas

medidas de reparación, no obstante que, el juez en su sabiduría tuvo a bien y conforme a derecho decretarlas.

También se debe mencionar que la presente investigación al haber sido de naturaleza documental, teórica y analítica pretendió avocar las diferentes posturas que al interior de la jurisprudencia y de la doctrina a nivel nacional e internacional, se tienen acerca de la manera de reparar a las víctimas de violación a los Derechos Humanos y especialmente el reconocimiento de las medidas de satisfacción que fueron el objeto central de esta disertación. Conforme a lo anterior se debe hacer la aclaración que, la sola elaboración del presente escrito constituye *per se* una manera de dignificar a las víctimas en Colombia, ya que, si bien existen publicaciones y estudios que han trabajado la implementación de las medidas de reparación con ocasión a la violación de los Derechos Humanos en este país, ninguna de ellas se ha encargado de manera concreta, sistemática y a profundidad de estudiar el reconocimiento en sede administrativa y judicial de las medidas de satisfacción.

Finalmente, y de conformidad como se afirmó en la parte introductoria y metodológica, la naturaleza de esta investigación consistió en analizar la variedad de documentación jurídica que existe a nivel nacional e internacional sobre las medidas de reparación, haciendo énfasis en lo que el título ya denota, cual es si existía *concordancia o discrepancia* de las medidas de satisfacción que reconoce el ordenamiento jurídico colombiano, con las desarrolladas por el sistema interamericano de Derechos Humanos, especialmente con la jurisprudencia del Tribunal regional. De esta manera se puede decir que, existe **concordancia** del derecho colombiano con el sistema regional bajo el sentido que existe al interior del ordenamiento nacional, un reconocimiento en la Ley y en la jurisprudencia constitucional, ordinaria y administrativa del derecho de las víctimas a ser reparadas de forma integral y digna, y al interior de dicha garantía, un reconocimiento expreso de las medidas de satisfacción. Igualmente existe **concordancia** en el hecho que, por primera vez, el Estado colombiano a través de una Ley y de sus gobernantes reconoce la existencia del conflicto armado y el deber constitucional e internacional de reparar a las víctimas, siendo las Leyes 975 y 1448 dos expresiones de dicha correlación

Por otra parte, se evidencia **discordancia** cuando al interior de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha condenado al Estado colombiano, se reconocen variedad de medidas

de satisfacción, las cuales, si bien encuentran asidero en el derecho a través de las mencionadas leyes *ex ante*, en la práctica judicial aún es mínima su aplicación, especialmente en Justicia y Paz y en los procesos de reparación directa ante lo contencioso, así puede decirse, que existe, un deber de la institucionalidad colombiana de propender un reconocimiento más integral y pluralista de las medidas de satisfacción. En último lugar, existe **discordancia**, en el hecho de que, al interior del derecho colombiano, existen mecanismos especializados (leyes, políticas públicas, instituciones) que propenden por un acompañamiento a las víctimas en los procesos judiciales y administrativos, así como otorgarles voz y participación en las formas que ellas consideran deber ser dada su reparación; contrario a lo llevado a cabo en la Corte Interamericana que solamente a través de la Comisión y ocasionalmente por medio de representación propia les es dable la participación en la manera en que ellas consideren deben ser reparadas.

La presente investigación es concebida como un aporte de la academia a la protección y garantía de los Derechos Humanos en Colombia, en la medida en que se constituye en una herramienta para las víctimas y los operadores jurídicos, para conocer más acerca de la naturaleza de las medidas de satisfacción, su alcance y las problemáticas que tiene su reconocimiento, a partir de su consagración en la Ley y su reconocimiento en la Jurisprudencia, por lo que, se debe expresar que la presente tesis de maestría, es el primer nivel de una investigación de posgrado que busca reconocer cuales con los avances y las problemáticas que en Colombia presenta la implementación de las medidas de satisfacción. Por lo cual la siguiente etapa que se pretende iniciar a nivel doctoral se circunscribirá a analizar en la práctica jurídica nacional, y por medio de estudios de caso, entrevistas y seguimiento al cumplimiento de las medidas, si el Estado colombiano cumple con los estándares internacionales en materia de reparación y con los postulados constitucionales de la carta política de 1991.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

1. Antkowiak, T. (2014). “*Artículo 10. Derecho a indemnización*”. En Steiner, C. & Uribe, P. (Editores). “Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario”. Bogotá Konrad Adenaur Stiftung y Editorial Temis.
2. Arévalo, D. (2012). “*Garantía del derecho a la verdad en el marco legal de justicia transicional en Colombia*”. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Ciencias jurídicas, monografía de grado.
3. Blanc, A. (2001). “*Universalidad, indivisibilidad, e interdependencia de los derechos humanos a los cincuenta años de la declaración universal*”. En Blanc A (Ed). “La protección de los derechos internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la declaración universal”. Madrid: Ed. Tecnos.
4. Calderón Gamboa, J.F. (2013). “*La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano*”. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación-Fundación Konrad Adenauer.
5. Cano, M. & Caro, O. (2011). “Las grandes dificultades de la reparación administrativa de las víctimas de la violencia en Colombia Algunos comentarios respecto a la implementación del decreto 1290 de 2008” en Revista *FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS*. Vol. 41, No. 115.
6. Cárdenas, M & Suarez, I. (2014). “Aplicación de los criterios de reparación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias del Consejo de Estado colombiano”, en Revista *Opinión Jurídica*, Vol. 13, N° 26.

7. Carrillo, A. (2006). *“Justice in context: the relevance of inter-american human rights law and practice to repairing the past”*. En de Greiff, P.(Ed.). *“The handbook of reparations”*. Oxford: The International Center for Transitional Justice.
8. Cassel, D. (2010). *“El alcance e impacto cada vez mayores de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”*. Obtenido de [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2895/10.pdf]
9. Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2015). *“Estudio sobre la implementación del Programa de Reparación Individual en Colombia”*. ICTJ. Disponible en [https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-COL-Estudio-reparacion-individual-2015.pdf]
10. Consejo de Estado. (2015). *“Decisiones relevantes de responsabilidad del Estado sobre graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”*.
11. de Castro, B. (1996). *“la universalidad de los derechos humanos: ¿dogma o mito?”*. En *Revista Derechos y libertades*, No. 13. Obtenido de [http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1298/DyL-1995-II-5-CastroCid.pdf?sequence=1]
12. Córdoba Díaz, J.B. (2015). *“Reparos o derecho a la reparación: análisis de las sentencias de la corte interamericana en los casos colombianos de desaparición forzada”*. Bogotá: Tesis de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Obtenido de [http://porticus.usantotomas.edu.co/bitstream/11634/334/1/reparos%20o%20derecho%20a%20la%20reparacion%20analisis%20de%20las%20sentencias%20de%20la%20corte%20interamericana%20en%20los%20casos%20colombianos%20de%20desaparicion%20forzada.pdf]
13. Correa, C. *“Sección 2. Competencia y Funciones. Artículo 63”*. En Steiner, C. & Uribe, P. (Editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Bogotá Konrad Adenaur Stiftung y Editorial Temis.

14. Crawford, J. (2009). *“Artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”* obtenido de [http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf]
15. Escobar, L., Benítez, V. & Cárdenas, M. (2011). La influencia de los estándares interamericanos de reparación en la jurisprudencia del consejo de estado colombiano, en Revista *Estudios Constitucionales*, Año 9, N° 2, 2011.
16. Falk, R. (2006). *“Reparations, international law, and global justice: a new frontier”*. En de Greiff, P.(Ed.). *“The handbook of reparations”*. Oxford: The International Center for Transitional Justice.
17. Ferrer Mac-Gregor, E. & Pelayo Möller C.M. (2014). *“Parte I – deberes de los Estados y derechos protegidos”*. En Steiner, C. & Uribe, P. (Editores). *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*. Bogotá Konrad Adenaur Stiftung y Editorial Temis.
18. García Arboleda, J. (2013). *“El lugar de las víctimas en Colombia”*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, CITpax, Editorial Temis.
19. de Greiff, P. (2006). *“Justice and reparations”*. En de Greiff, P.(Ed.). *“The handbook of reparations”*. Oxford: The International Center for Transitional Justice.
20. Muñoz Murillo, E.A. (2013). *“El derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno: Reparación excepcional en el marco de la Justicia Transicional”*. Bogotá. Tesis de Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
21. Noguera, H. (2010). *“Consejo de Estado vs. Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones”*, en *Revista Verba Iuris*, No. 24.
22. Núñez, R. y Zuluaga, L. (2012). *“Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano”* en *Revista Análisis Internacional*, Vol. 1, No 6, disponible en <http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/853/864>
23. Orjuela, M. (2015). *“Implementación de la política de reparación integral en la ciudad de Ibagué desde 2012 hasta 2014 en el marco de la ley de víctimas 1448 de 2011”*. Bogotá: Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales, tesis de maestría en Estudios Políticos.

24. Pastor Ridruejo, J.A. (2014). *“Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos”*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta.
25. Rettberg, A. (2007). *Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?*. Bogotá: GIZ, Fiscalía General de la Nación, Universidad de los Andes.
26. Rincón Mora, L.M. (2015). *“Evaluación del componente de asistencia de la política pública de atención y reparación a víctimas sobre la población desplazada residente en Cauca (Antioquia)”*. Bogotá: Tesis de maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.
27. Rivera Rodríguez, G.M. (2014). *“Avances jurisprudenciales y legislativos del derecho a la reparación a pueblos indígenas como víctimas de violaciones de derechos humanos”*. Bogotá. Tesis de Maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
28. Rousset, A.J. (2011). “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En *Revista Internacional de Derechos Humanos*, No. 1. Obtenido de [<http://www.corteidh.or.cr/tablas/usuario/frank/30948.pdf>]
29. Shelton, D. (2005). *“Remedies in international human rights law”*. Oxford: University Press.
30. Steiner, C. & Uribe, P. (2014). *“Introducción general”*. En Steiner, C. & Uribe, P. (Editores). *“Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario”*. Bogotá Konrad Adenaur Stiftung y Editorial Temis.
31. Thompson, J. (2002). *“Taking Responsibility of the Past. Reparation and Historical Justice”*. Cambridge: Polity Press.
32. Urueta, K. (2014). *“La reparación de las víctimas del conflicto armado interno: una defensa del principio de complementariedad entre las vías administrativa y judicial”*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Facultad de Derecho, tesis de maestría en derecho.
33. Vargas Díaz, D.R. (2014). *“Cumplimiento de Medidas de Rehabilitación ordenadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”*. en *Dialogo de Saberes* No. 41. Obtenido de

[<http://www.unilibre.edu.co/dialogosdesaberes/dialogos-41/cumplimiento-de-%20medidas-de-rehabilitacion-ordenadas-en-sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-por-parte-del-estado-colombiano.pdf>]

34. Vásquez Quintero, D.P. (2014). *“Acompañamiento psicosocial: un cambio en la concepción de reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia bajo el marco del decreto 4800 de 2011.”*. Bogotá: Tesis de maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana.
35. Vera Piñeros, D. (2008). Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU. . .” *Revista Papel Político*. Vol. 13 N° 2.

Documentos internacionales

36. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013) *“Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”* OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13 31 diciembre 2013.
37. Comité Internacional de la Cruz Roja. (2002). *“Los derechos humanos y el derecho humanitario en los principios rectores de la aplicación profesional de la ley”*. Ginebra: CICR.
38. ONU, Asamblea General. (1946). Resolución 3 (I) sobre *“Extradición y castigo de los criminales de guerra”* del 13 de febrero de 1946.
39. _____. (1973). Resolución 3074 (XXVIII) sobre los *“Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”* del 3 de diciembre de 1973.
40. _____. (2002). Resolución A/56/83 de *“Responsabilidad de los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos”* de 28 de enero de 2002.
41. _____. (2006). Resolución A/60/147 de *“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho*

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” de 21 de marzo de 2006.

Jurisprudencia internacional

42. The Permanent Court of International Justice. (1923). August 17th, *Case of the s.s. Wimbledon*. Obtenido de [http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf]
43. _____. (1925). Series A. – No. 5, March 26th, *The Mavromhlatis Jerusalem Concessions*. Obtenido de [http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_05/15_Mavrommatis_a_Jerusalem_Arret_19250326.pdf]
44. _____. (1927). Series A. - No. 9, July 26th, *Collection Of Judgments Case Concerning The Factory At Chorzow (Claim For Indemnity-Jurisdiction)*. Obtenido de [http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf]
45. _____. (1932). Series A/B - No. 44, February 4th, *Treatment of Polish Nationals and other Peksons of Polish Origin or Speech in The Danzig Territory*. Obtenido de: [http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_44/01_Traitement_nationaux_polonais_Avis_consultatif.pdf]

Jurisprudencia interamericana

46. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 28 de julio de 1988, (Serie C), No. 4.
47. Caso Godínez Cruz vs. Guatemala, Sentencia de 20 de enero de 1989. (Serie C) No. 5.
48. Caso Fairén Garbí Y Solís Corrales vs. Honduras, Sentencia de 15 de marzo de 1989 (Fondo).
49. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, (Serie C), No. 15, (Reparaciones y Costas).
50. Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, (Serie C), No. 42, (Reparaciones y Costas).

- 51.** Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Serie C). No. 52, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 52.** Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, (Serie C), No. 72, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 53.** Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, (Reparaciones y Costas).
- 54.** Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 26 de mayo de 2001, (Serie C) No. 77, (Reparaciones y Costas).
- 55.** Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 30 de septiembre de 2001, (Serie C), No. 87, (Reparaciones y Costas).
- 56.** Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, (Serie C). No. 89, (Reparaciones y Costas).
- 57.** Caso Duran y Ugarte vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, (Serie C). No. 88, (Reparaciones y Costas).
- 58.** Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Sentencia de 27 de febrero de 2002, (Serie C), No. 92, (Reparaciones y Costas).
- 59.** Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002, (Serie C). No. 94, (Reparaciones y Costas).
- 60.** Caso del Caracazo vs. Venezuela, Sentencia 29 de agosto de 2002, (Serie C) No. 95, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 61.** Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, (Serie C) No. 97, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 62.** Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, (Serie C) No. 101, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 63.** Caso 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, (Serie C), No. 109, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 64.** Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, (Fondo, Reparaciones y Costas).
- 65.** Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, (Serie C). No. 119, (Fondo Reparaciones Y Costas).

66. Caso de Las Hermanas Serrano Cruz, vs, El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, (Serie C) No. 120, (Fondo, Reparaciones y Costas).
67. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Sentencia de 7 de febrero de 2006, (Serie C) No. 144, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
68. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, (Serie C) No. 154, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
69. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, (Serie C) No. 158, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
70. Caso Boyce y otros vs. Barbados, Sentencia de 20 de noviembre de 2007, (Serie C.) No. 169, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
71. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, (Serie C.) No. 209, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
72. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, Sentencia de 25 de mayo de 2010, (Serie C.) No. 212, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
73. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010, (Serie C.) No. 216, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
74. Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, (Serie C.) No. 219, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
75. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, (Serie C.) No. 220, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

Jurisprudencia de la Corte Constitucional

76. Sentencia C-327 de 1997
77. Sentencia C-430 de 2000
78. Sentencia C-228 de 2002
79. Sentencia C-916 de 2002
80. Sentencia C-170-04
81. Sentencia C-148 de 2005

- 82. Sentencia C-370 de 2006
- 83. Sentencia C-454 de 2006
- 84. Sentencia C-1199 de 2008
- 85. Sentencia T-722 de 2008
- 86. Sentencia T-085 de 2009
- 87. Sentencia T-979 de 2005
- 88. Sentencia T-367 de 2010
- 89. Sentencia T-458 de 2010
- 90. Sentencia T-464 de 2011
- 91. Sentencia T-603 de 2011
- 92. Sentencia C-715 de 2012
- 93. Sentencia C-782 de 2012
- 94. Sentencia C-438 de 2013
- 95. Sentencia C-753 de 2013
- 96. Sentencia C-462 de 2013
- 97. Sentencia C-839 de 2013
- 98. Sentencia SU-254 de 2013
- 99. Sentencia C-286 de 2014
- 100. Sentencia C-084 de 2016.

Jurisprudencia contenciosa-administrativa

- 101. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera, Sentencia de 14 de diciembre de 1993. Exp. 8493.
- 102. _____,
Sentencia de 15 de enero de 1996. Exp. 10827.
- 103. _____,
Sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 15567.
- 104. _____,
Sentencia de 16 de agosto de 2007. Exp. 30114.
- 105. _____,
Sentencia de 20 de febrero de 2008. radicación 76001-23-25-000-1996-04058-01(16996).

- 106.** _____,
Sentencia de 20 de febrero de 2008. exp. 16.996.
- 107.** _____,
Sentencia de 28 de enero de 2009. Rad. 07001-23-31-000-2003-00158-01(30340).
- 108.** _____,
Sentencia de 28 de enero de 2009. Rad. 500012331000199904688 01
- 109.** _____,
Sentencia de 14 de abril de 2011. Rad. 05001233100019960023701.
- 110.** _____,
Sentencia de 125 de abril de 2011 (unidad procesal). Rad.
52001233100019970878901; 5200123310001998005150;
52001233100019980051701.
- 111.** _____,
Sentencia de 8 de junio de 2011. Rad. 52001233100019980051601
- 112.** _____,
Sentencia de 29 de octubre de 2012. Rad. 20001 23 31 000 1999 00274 01
- 113.** _____,
Sentencia de 5 de abril de 2013. Rad. 19001233100019990021701.
- 114.** _____,
Sentencia de 3 de mayo de 2013. Rad. 500012331002199200039200.
- 115.** _____,
Sentencia de 29 de agosto de 2013. Rad. 15001233100020010295101.
- 116.** _____,
Sentencia de 27 de septiembre de 2013. Rad. 05001-23-26-000-1990-05197-01.
- 117.** _____,
Sentencia de 27 de septiembre de 2013. Rad. 1500123 31000 1995 05276 01.
- 118.** _____,
Sentencia de 21 de noviembre de 2013. Rad. 0500123-31-000-1998-02368-01.
- 119.** _____,
Sentencia de 12 de marzo de 2014. Rad. 250002326000199802419 01.
- 120.** _____,
Sentencia de 9 de julio de 2014. Rad. 70001-23-31-000-1998-00808-01.

121. _____,
Sentencia de 28 de enero de 2015. Rad. 68001-23-31-000-2002-01343-01.
122. _____,
Sentencia de 5 de marzo de 2015. Rad.08001-23-31-000-2001-00993-01.
123. _____,
Sentencia de 15 de abril de 2015. Rad. 54001-23-31-000-1995-09280-01.
124. _____,
Sentencia de 25 de junio de 2015. Rad. 63001-23-31-000-2005-00323-01
125. _____,
Sentencia de 29 de julio de 2015. Rad.73001-23-31-000-2001-00403-01
126. _____,
Sentencia de 30 de julio de 2015. Rad.20001-23-31-000-2000-01017-01
127. _____,
Sentencia de 30 de septiembre de 2015. Rad. 25000-23-26-000-2000-00719-01
128. _____,
Sentencia de 2 de febrero de 2016. Rad. 41001-23-31-000-2005-01497-01.
129. _____,
Sentencia de 26 de mayo de 2016. Rad. 73001-23-31-000-2010-00286-01.
130. _____,
Sentencia de 26 de mayo de 2016. Rad. 63001-23-31-000-2009-00025-01.
131. _____,
Auto del 17 de septiembre de 2013, Rad. 45092, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Jurisprudencia penal

132. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 27 de abril de 2011. Proceso 34547 - Segunda instancia.

Jurisprudencia de Justicia y Paz

Tribunal superior de Barranquilla

133. Sentencia de 13 de julio de 2015. Radicado: 111-001-60-002253-2008-83160.
134. Sentencia de 21 de octubre de 2014. Radicado: 11-001-60-002253-2008-83374.
135. Sentencia de 1 de agosto de 2014. Radicado: 11-001-60-002253-2008-83201.

Tribunal superior de Medellín

- 136.** Sentencia de 7 de julio de 2015. Radicado: 110016000253 2009 83825.
- 137.** Sentencia de 23 de abril de 2015. Radicado: 110016000253-2006-82689.
- 138.** Sentencia de 2 de febrero de 2015. Radicado: 1 1 0 0 16000253200680018.
- 139.** Sentencia de 24 de septiembre de 2014. Radicados: 0016000253-2007-82700, 0016000253-2008-83269, 0016000253-2007-82699, 0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864, 0016000253-2008-83275 y 0016000253-2008-83285.
- 140.** Sentencia de 27 de agosto de 2014. Radicado: 110016000253 2008 83241.

Tribunal superior de Bogotá

- 141.** Sentencia de 3 de julio de 2015. Radicado: 110016000253.
- 142.** Sentencia de 10 de abril de 2015. Radicado: 110012252000201300069.
- 143.** Sentencia de 16 de diciembre de 2014. Radicado: 11001-22-52000-2014-00058-00.
- 144.** Sentencia de 11 de diciembre de 2014. Radicado: 2006- 80014.
- 145.** Sentencia de 29 de septiembre de 2014. Radicado: 110016000253200680450
- 146.** Sentencia de 29 de mayo de 2014. Radicado: 11-001-60-00253-2007 82855.
- 147.** Sentencia de 6 de diciembre de 2013. Radicado: 11-001-60-00 253-2006 80531.
- 148.** _____. Radicado: 110016000253.
- 149.** Sentencia de 30 de octubre de 2013. Radicado: 11-001-60-00 253-2006 810099.
- 150.** Sentencia de 30 de agosto de 2013. Radicado: 110016000253200680012.
- 151.** Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Radicado: 110016000253200880786.
- 152.** Sentencia de 30 de julio de 2012. Radicado: 110016000253200682222.
- 153.** Sentencia de 31 de enero de 2012. Radicado: 110016000253200680585.
- 154.** Sentencia de 7 de diciembre de 2011. Radicado: 110016000253-200681366.
- 155.** Sentencia de 1 de diciembre de 2011. Radicados: 1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070.

- 156. Sentencia de 29 de junio de 2011. Radicado: 110016000253200782790.
- 157. Sentencia de 2 de diciembre de 2010. Radicado: 110016000253200680281.
- 158. Sentencia de 29 de junio de 2010. Radicado: 110016000253200680077.

Legislación

- 159. Decreto 1290 de 2008.
- 160. Decreto Ley 4800 de 2011 que tiene por objeto *establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.*
- 161. Decreto Ley 4633 de 2011 “*por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas*”.
- 162. Decreto Ley 4634 de 2011 el cual estableció *la necesidad de regular los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a la atención, reparación integral y de restitución de tierras de las víctimas.*
- 163. Decreto Ley 4635 de 2011 que regula lo concerniente a *las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.*
- 164. Ley 446 de 1998.
- 165. Ley 975 de 2005 “*por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios*”.
- 166. Ley 1448 de 2011 “*por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones*”.